

ST

28 MAR 2012



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**“EL PROCESO DE ADOPCIÓN EN PANAMÁ Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS
SUPERIOR DEL MENOR BAJO, EL AMPARO DE LA LEY 61 DE 12 DE AGOSTO
DE 2008”**

POR:

YOSELYN YANETTE ACEVEDO CEDEÑO

2011

**DIGITALIZADO
DEPTO. DE COMPUTO
SIBIUP**

Obsequio del autor

13025

AGRADECIMIENTO

Quisiera expresar mi agradecimiento, primeramente a Dios, por ayudarme a realizar mis metas y por permitirme llegar hasta donde estoy.

De igual forma, expresar mi gratitud a mis padres CRISTOBAL ACEVEDO, NELLY CEDEÑO y a mi hermano CRISTOBAL ANTONIO, quienes día a día me motivaron y me apoyaron en la realización de este trabajo investigativo, para que culminara este proyecto.

Debo agradecer también a la profesora MAYRA GARRIDO, por haber brindado parte de su tiempo para ayudarme en la revisión de este trabajo y por estar siempre anuente a brindarme su colaboración, para así poder culminar esta tarea universitaria.

Y a todas esas personas que de alguna u otra forma influyeron en mi motivación para terminar mi tesis de maestría.

Muchas Gracias, con cariño,

LICDA. YOSELYN YANETTE ACEVEDO CEDEÑO

DEDICATORIA

Dedico esta trabajo de investigación a mis padres, CRISTÓBAL Y NELLY, quienes constantemente me motivan y aconsejan para que me supere profesionalmente y quienes me han enseñado lo importante que es obtener una educación superior. Por enseñarme a valorar lo que la vida nos da y sus lecciones para superar los obstáculos que nos impone la sociedad y de esta forma saber aprovecharla a través de sacrificios y luchas.

LICDA. YOSELYN YANETTE ACEVEDO CEDEÑO.

INTRODUCCIÓN.....	i
--------------------------	----------

CAPÍTULO PRIMERO: MARCO CONCEPTUAL

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1 1	Planteamiento del Problema	1
1 2	Antecedentes	1
1 3	Justificación e Importancia de la Investigación	5
1 4	Hipótesis	5
1 5	Objetivos.	5
1 5 1	Objetivos Generales	5
1 5 2	Objetivos Específicos	6
1 6	Alcance y limitaciones de la investigación	6
1 6 1	Alcance de la investigación	6
1 6 2	Limitaciones	8
1 7	Aportes	8

CAPÍTULO SEGUNDO: MARCO TEÓRICO.

2	Marco de Referencia	10
2 1	Antecedentes Históricos de la Adopción	10
2 2	Conceptualización de Términos	14
2 2 1.	Adopción	14
2 2 2	Adoptante	16

2 2 3 Adoptado	17
2 2 4 Autoridad Central	17
2 2 5 Acogimiento Preadoptivo	17
2 2 6 Estado de Adoptabilidad	17
2 2 7 Familia Ampliada	18
2 2 8 Familia Biológica o de Origen	18
2 3 Principios de la Adopción	18
2 4 Teorías y Doctrinas sobre la Adopción	20
2 4 1 Teorías	20
2 4 1 1 La Contractual	20
2 4 1 2 La Teoría del Acto Condición	20
2 4 1 3 La Teoría de Institución	21
2 4 2 Doctrinas	22
2 4 2 1 Doctrina de la Situación Irregular	22
2 4 2 2 Doctrina de la Protección Integral de las Naciones Unidas	23
2 5 Naturaleza Jurídica de la Adopción	24
2 5 1 La Teoría Contractual	25
2 5 2 Teoría de Acto Condición	26

2 5 3 La Teoría de la Relación Jurídica	28
2 5 4 Teoría Institucionalista	28
2 5 4 1 Institución de Derecho Privado	29
2 5 4 2 Institución de Derecho de Familia	29
2 5 4 3 Institución de Derecho de Menores	30
2 6 Diferencias con la Filiación	31
2 7 Diferencias con la Legitimación	31
2 8 Formas de Adopción	32
2 8 1 Adopción Conjunta e Individual	32
2 8 1 1 Adopción Conjunta	32
2 8 1 2 Adopción Individual	34
2 9 Tipos de Adopción	35
2 9 1 Adopción Nacional	35
2 9 2 Adopción Internacional	35
2 10 Sujetos en el Proceso de Adopción	36
2 10 1 Persona Adoptada	36
2 10 2 Persona Adoptante	37

2 11 Aspectos Legales	38
2 11 1 La Actuación del Estado como garante del Interés Superior del Menor	39
2 12 Personas que otorgan el consentimiento para la Adopción de los niños y niñas	40
2 13 El consentimiento que se otorga para la Adopción del niño o niña que esta por nacer	41
2 14 Efectos de la Adopción	42
2 14 1 Extinción del vínculo jurídico familiar con la familia biológica o de origen	43
2 14 2 Efecto Retroactivo	46
2 14 3 Menores Abandonados y sus Secuelas Biológicas	46
2 15 Procedimiento de Adopción	49
2 15 1 Constitución de la Adopción	49
2 15 2 Procedimiento para la Adopción de Personas Menores de Edad	49
2 15 3 Funciones de La Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones	50
2 16 Inicio del Procedimiento de Adopción	51
2 17 Solicitud de Adopción	52
2 18 Requisitos de la Adopción	52

2 18 1	Requisitos de Fondo	53
2 18 1 1	Diferencia de Edad	53
2 18 1 2	Mayoría de Edad del Adoptante	53
2 18 1 3	Condiciones Afectivas, Morales, Sociales y Económicas del Adoptante	54
2 19	Requisitos de Forma	54
2 19 1	Consentimiento	54
2 19 1.1	Formalidades y Requisitos para la Manifestación del Consentimiento en el Proceso de Adopción	55
2.19 1 2	El Asesoramiento de los Padres Biológicos, Adoptivos y de todas las Personas de las Cuales se Requiere el Consentimiento para la Adopción de los Menores	56
2 19 1 3	El Consentimiento para Adoptar que se Otorga mediante Acto Administrativo y de Declaración Notarial	57
2 19 1 4	El momento en que se otorga el Consentimiento para la Adopción	59
2 19 2	La Autorización Judicial	60
2 19 3	La Inscripción en el Registro Civil	60
2 19 4	Documentación Requerida para Adoptar	60

2 19 5 Documentación obtenida en la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones	61
2 20 Etapa Preadoptiva de Evaluación	62
2 20 1 Evaluación en la Adopción del Hijo o Hija de Crianza o del Cónyuge o Conviviente en Unión de Hecho	63
2 20 2 Declaración de Idoneidad para Adoptar	64
2 21 Etapa Preadoptiva de Asignación	64
2 21 1 Asignaciones	65
2 21 1 1 La Asignación Temporal	67
2 21 1 2 De la Declaratoria Judicial de Adopción	67
2 21 2 La Opinión del Menor en las Adopciones Consentidas	68
2 22 Etapa Preadoptiva de Acogimiento	69
2 22 1 Etapa de Constitución de la Adopción	70
2 22 1 1 Finalidad	70
2 22 1 2 Declaración Judicial de Adopción	70
2 22 1 3 Procedimiento Judicial	71
2 22 1 4 Audiencia de Adopción	71
2 22 1 5 Sanción	72

2 22 1 6 Valor Probatorio	72
2 22 1 7 Apelación	73
2 22 1 8 Trámite de Segunda Instancia	74
2 22 1 9 Inscripción de la Adopción	74
2 23 Etapa Postadoptiva	74
2 24 Adopción Internacional	75
2 24 1 Presupuestos para la Adopción Internacional	76
2 24 2 Protección Internacional de los Niños	77
2 24 3 Declaraciones Internacionales sobre los Derechos del Niño	79
2 24 3 1 Declaración de Ginebra	80
2 24 3 2 Declaraciones de los Derechos Humanos	81
2 24 3 3 Declaraciones de los Derechos del Niño	82
2 24 3 4 La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño	83
2 25 Entidades Colaboradoras en Materia de Adopción Internacional	85
2 25 1 Autoridades Centrales	86
2 25 1 1 Cooperación Interestatal a través de las Autoridades Centrales	86
2 26 Solicitud de Adopción Internacional	87

2 26 1 Documentación para Solicitantes con Residencia en el Extranjero	87
2 26 2 Acogimiento Preadoptivo de Adopción Internacional	88
2 27 Seguimiento de las Adopciones Internacionales	89
2 28 Características de la Adopción como Nuevo Estado Civil	90
2 28 1. Indisponible o inalienable	90
2 28 2 Imprescriptible	90
2 28 3 Irrevocable	90

CAPÍTULO TERCERO: MARCO METODOLÓGICO

3 1. Tipo de Investigación	91
3 2 Definición Operacional de Variables	92
3 2 1 Variables Dependientes	92
3 2 1 1 Definición Conceptual	93
3 2 1 2 Definición Instrumental	93
3 2 1 3 Definición Operacional	93
3 2 2 Variables Independientes	94
3 3 Fuentes y Sujetos de Información	95
3 3 1 Fuentes Materiales	95

3 4 Población y Muestra .	..	95
3 4 1 Población	..	96
3 4 2 Muestra		96
3 5 Descripción de la Instrumentación		97
3 6 Tratamiento de la Información		97
3 7 Cronograma de Trabajo		98

CAPÍTULO CUARTO: ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.

4 Presentación de Resultados		99
4 1 Análisis de las Encuestas		99
4 3 Análisis de las Entrevistas		105
CONCLUSIONES	.. .	108
RECOMENDACIONES		110
BIBLIOGRAFÍA	.	111
ANEXOS		

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo concerniente a la legislación sobre el Instituto Jurídico de la ADOPCIÓN, consagrada en la Ley 61 de 12 de agosto de 2008, es una Institución propia del derecho de menores y derecho de familia; y que desde tiempos antiguos, los Estados se han preocupado por los derechos de los niños, y hoy en día representa una institución encargada de la protección del menor y del adolescente, ya que son el futuro de cada nación.

Es por ello que la Institución Jurídica de la ADOPCIÓN tiene como propósito solucionar el problema de los niños que han sido abandonados, buscando la mayor protección y velar por el interés y bienestar del menor y del adolescente. Por lo que, la presente investigación está dirigida a estudiar y analizar la figura y el procedimiento de la Adopción a nivel nacional e internacional, sobre los convenios y otras leyes que aplican los Estados contratantes sobre los derechos del niño.

En nuestro País, la Ley 61 de 12 de agosto de 2008, consagra la norma básica y esencial para la protección del menor, la misma aspira a garantizar los procesos de adopción para que los niños y niñas gocen de las mejores condiciones al momento de incorporarse a una nueva familia. Por otro lado el Código de la familia y del Menor, en su capítulo VI, consagra la normativa referente a la colocación familiar u hogar sustituto. Consiste en ubicar a la persona

menor de edad en un centro u hogar distinto del de sus padres, guardadores o parientes, con la obligación de alimentarlo, custodiarlo, educarlo y asistirlo.

En cuanto a la adopción internacional, el Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, establece salvaguardas para asegurar que la adopción internacional tenga lugar en consideración al interés superior del niño y al respecto de sus derechos fundamentales.

El Convenio de la Haya de 1993 reconoce que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su Estado de origen. En aplicación del mismo, es necesaria que sean examinadas primeramente las posibilidades de colocación del niño en su Estado de origen.

El presente trabajo está enfocado al proceso de adopción de menores y, sobre todo plasmar lo importante que es resaltar la protección del interés superior del menor en este procedimiento, el cual está estructurado de la siguiente manera:

En el capítulo primero, “Aspectos Generales”, se desglosa el marco conceptual referente al planteamiento del problema, los antecedentes, importancia de la investigación, hipótesis; los objetivos, tanto generales como específicos, el alcance, limitaciones de la investigación y sus aportes.

El segundo capítulo, “Marco Teórico”, desarrolla el marco referencial que está compuesto por la reseña histórica de la adopción, teorías y doctrinas sobre la adopción, naturaleza jurídica de la adopción, diferencias con la filiación, diferencias con la legitimación, las formas y tipos de adopción, sujetos en el proceso de adopción, aspectos legales, la actuación del Estado como garante del interés superior del menor, Personas que otorgan el consentimiento para adopción de los niños y las niñas,

El consentimiento que se otorga para la adopción del niño o niña que está por nacer, los efectos de la adopción, el procedimiento de la adopción, el inicio del procedimiento de la adopción, solicitud de adopción, requisitos de la adopción, requisitos de fondo y forma en la adopción, etapas en el proceso de adopción tales como: preadoptiva de evaluación, preadoptiva de asignación, preadoptiva de acogimiento, la etapa de constitución de la adopción y la etapa postadoptiva, algunos aspectos importantes en la adopción internacional y finalmente algunas características de la adopción como nuevo estado civil.

El capítulo tercero, “Marco Metodológico”, está relacionado con el tipo de investigación, la definición operacional de variables, las fuentes y sujetos de información, población y muestra, descripción de la instrumentación y el tratamiento de la información.

En el capítulo cuarto, se presenta el análisis estadístico derivado de la información recabada de las encuestas y entrevistas.

Finalmente, se señalan las conclusiones tendientes a destacar los aspectos relevantes de la investigación y están plasmadas algunas recomendaciones con el propósito de mejorar ciertas situaciones en el ámbito de esta investigación.

CAPITULO I

I. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.Planteamiento del Problema

En Panamá existe una gran cantidad de niños y niñas que han sido abandonados por sus madres, o bien por ambos progenitores; así como también vemos niños huérfanos, con problemas de discapacidad, y sin ningún familiar que pueda acogerlos o hacerse responsables de sus cuidados. Otra gran cantidad de niños, igualmente son objeto de explotación; es por ello que se plantea la problemática del papel de la sociedad y del Estado; si éstos deben permitir que los niños crezcan y se desarrollen en una Casa Hogar de Niños u Orfanatorio o que sean dados en adopción con la finalidad de que crezcan en un hogar en el que reciban el apoyo económico, afectivo y moral de sus padres sustitutos. Es por ello que, a través de la institución de la adopción, la cual se encuentra reglamentada por disposiciones legales, diferentes convenios y tratados internacionales, que se persigue velar por el bienestar de los menores en estado de abandono.

1.2. Antecedentes

La Adopción es una figura que se remonta al Derecho antiguo en el año 4000 A.C., en las civilizaciones Egipcias, donde ya existían acciones de represión contra menores y medidas de protección a favor de los niños. En cuanto a las primeras acciones, recordemos que en la Biblia el Éxodo da a conocer cómo los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, y dispusieron que cuando se atendían los partos, fijasen su

atención en el sexo del recién nacido, estipulando que: “si era niña dejadle vivir, pero si es niño matadlo”. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el Rey de Egipto les había ordenado, dejando vivir a los niños varones.

Fue en esta época, cuando un hombre de la tribu de Levi se casó con una mujer de su misma tribu, la cual quedó embarazada y da a luz un hijo, y al ver que el niño era hermoso, lo escondió durante tres meses, pero viendo que no podía tenerlo escondido por más tiempo lo tomó y pone en un canastillo de junco, tapa todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara el agua y luego coloca al niño dentro del canastillo posteriormente lo deja entre los juncos a orillas del Río Abilo.

Pasado un tiempo, de haberse deslizado el canastillo por el río, la hija del Faraón al momento de bañarse en el río ve el canastillo y se percata que adentro del mismo había un niño llorando, sintió compasión por él y dijo *“este niño será adoptado”*.

En el Derecho Romano, en el período de Justiniano, se distinguían tres (3) períodos, en base la edad: el primero de irresponsabilidad absoluta hasta los 7 años, llamado de la infancia; el próximo a la infancia hasta 10 años y medio en el varón y 9 años y medio en la mujer. El infante no podía hablar, aún no era capaz de pensamiento criminal. El segundo, correspondiente a la proximidad de la pubertad, hasta los doce en la mujer y en el varón hasta los catorce (14) años, cuando el menor no podía aún engendrar; pero en el cual la incapacidad de pensamiento podía ser avivada por la

malicia, el impúber podía ser castigado; y el tercero de la pubertad hasta los 18 años extendido después hasta los 25 años denominado de minoridad, cuando eran castigados los actos delictuosos, cometidos por los menores, estableciendo sólo diferencias en la naturaleza y en la calidad de la pena.

En Roma surge la figura de la patria potestad, como un derecho de los padres; sobre todo del padre en relación con los hijos, derecho sobre la vida y la propiedad. Los romanos la sistematizaron y le dieron gran importancia; por ende, se considera la **adopción** como de origen romano: *“La adopción surge de una necesidad religiosa: continuar el culto doméstico a los antepasados, el mismo que debió ser realizado por un varón”*.

En el **Derecho Medieval** se sostuvieron diferentes métodos de protección a favor de los menores de edad. Los glosadores indicaban que los delitos cometidos por los menores no debían sancionarse, sino cuando éstos cumplieran la mayoría de edad. Los germanos indicaron que no podía imponerse al delincuente ciertas penas, como la de muerte y otras graves, y así lo dispuso el viejo Código Sajón. La Ley Carolina, que ordenaba remitir el caso del que a causa de su juventud o de otro defecto no se daba cuenta de lo que hacía, sometiéndolo al árbitro de los peritos en derecho.

En el siglo XIV se fundó “El padre de los huérfanos”, una institución destinada a la educación correctiva y la capacitación profesional de los menores delincuentes y

desamparados. En 1407 se creó un juzgado de huérfanos, en 1410, San Vicente Ferrer constituyó una cofradía que atendía en un asilo a niños abandonados por sus padres. Un siglo más tarde igual iniciativa ampliada a los delincuentes, tuvo en Francia San Vicente de Paúl.

En la actualidad, muchos países a nivel mundial, desarrollados como en vía de desarrollo, se encuentra una gran cantidad de niños huérfanos, carentes de una familia que los apoye, a consecuencia de diversos factores, entre ellos, las grandes catástrofes mundiales provocadas por el mismo hombre, como por contiendas bélicas y las hambrunas. En segundo término, las catástrofes naturales como las erupciones volcánicas, los terremotos, los huracanes, las inundaciones y las epidemias.

Otra fuente determinante de la orfandad es el **abandono voluntario de niños por parte de padres, madres o toda su familia.**

Este abandono se produce por situaciones desafortunadas en las que se vinculan con mayor frecuencia a la madre gestante: La progenitora puede ser objeto del fallecimiento, una salud muy quebrantada, la imposibilidad socio afectiva de crianza por factores de edad, estado civil, salud mental o la simple ausencia de madurez; por lo que esta situación provoca el gran interés de adoptar un menor que sufra algunas de estas duras circunstancias.

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación

Esta investigación es de gran importancia, puesto que a través de la figura de la adopción, como institución jurídica, de orden social y de protección familiar, puede proporcionar un bienestar para aquellos niños que no cuentan con alternativas familiares para su guarda y crianza. Mediante esta institución jurídica, los menores y adolescentes que se encuentran en un orfanato o institución benéfica, tienen la oportunidad de crecer al lado de personas que poseen el entusiasmo de adoptar menores, formándolos a fin de futuro, personas de bien, evitando que caigan en las garras de la delincuencia y las drogas; preservando los derechos de muchos niños que se encuentran en situación difícil y evitando también que muchos de ellos pasen toda su infancia dentro de estas instituciones.

1.4. Hipótesis

El proceso de Adopción en Panamá representa una alternativa eficaz y jurídica para proteger a los menores abandonados.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivos Generales

1.5.1.1. Conocer el procedimiento aplicable a la adopción en nuestro País, en relación con las normas que regulan esta institución jurídica.

1.5.1.2. Analizar la problemática de los niños que se encuentran en estado de abandono y razones por las que se institucionalicen y agilicen las adopciones.

1.5.2. Objetivos Específicos:

1.5.2.1. Describir el procedimiento de la adopción y las autoridades competentes para atender este tipo de procesos.

1.5.2.2. Analizar las disposiciones legales que amparan la adopción como mecanismo procesal a nivel nacional e internacional, sus principios, reglas de interpretación y otros aspectos.

1.5.2.3. Enumerar los factores que inciden en el abandono y explotación de menores en Panamá.

1.5.2.4. Analizar la problemática existente en la aplicación de la Ley de adopción, determinando su efectividad.

1.6. Alcance y Limitación de La Investigación

1.6.1. Alcance de la Investigación

Esta investigación tiene por finalidad, analizar la Ley 61 de 12 de agosto de 2008, que dicta las disposiciones correspondientes al ámbito de aplicación, definiciones, principios y reglas de interpretación, correspondientes a los procesos de adopciones.

Por otra parte, estudiar los convenios en los que Panamá es signatario, (*La Convención sobre los Derechos del Niño*); que contempla la adopción como una forma de protección a la infancia, donde la adopción en el extranjero sea el último recurso a utilizar, toda vez que se requiere de la cooperación internacional, por lo que se deben implementar mecanismos a fin de disminuir y combatir las adopciones clandestinas, haciendo más transparentes las adopciones que deben ser canalizadas por intermediarios reconocidos.

El “*Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993*”, relativo a la protección del niño y cooperación en materia de adopción internacional, establece un sistema de garantías y un mecanismo de cooperación entre autoridades centrales, que se aplican a las adopciones que se realizan entre los Estados miembros del mismo.

Todas estas normas tienen como único propósito promover y garantizar el respeto de los niños y niñas, erradicar la explotación infantil, asegurando las condiciones humanitarias de vida, el desarrollo pleno de su personalidad y evitando la vulneración de sus derechos, como menores: el derecho a un nombre y nacionalidad, a no ser trasladado o retenido ilícitamente, derecho a la educación, a no ser explotados sexualmente y a recibir buen trato de las personas que están a su alrededor.

Por lo que, a través de esta investigación se exhorta a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, La Dirección Nacional de Adopciones y los Juzgados de Familia, a agilizar

estos procedimientos ya que en nuestro país existen muchos niños que han sufrido las diversas formas de abandono, y por esta razón hay que velar para que sean dados en adopción a familias que realmente quieran hacerlo y que de corazón estén anuentes a atender a los menores como si fuesen hijo biológico.

1.6.2. Limitaciones:

El respaldo económico, puesto que para las movilizaciones, al momento de investigar representa un factor importante; como segunda limitación está la falta de documentación en la provincia, la falta de bibliografía en este tema y de procesos ventilados en esta región, lo cual dilató nuestro trabajo. Finalmente, la realización de visitas, entrevistas a los Jueces de Familia, Abogados y personas que cuentan con experiencia en el tema, incidió en esta investigación.

1.7. Aportes

La Adopción, como institución social, se fundamenta en el derecho natural de los seres humanos a nacer, vivir, y crecer como personas y desarrollarse, mediante la figura de la familia. Esto significa que no sólo se le debe proteger desde la concepción y nacimiento, sino también hasta la muerte.

El derecho más cercano e inmediato a la vida es el derecho a contar con un hogar y una familia que contribuya a su formación como persona; de lanzarse a la vida con los recursos necesarios para enfrentarla.

El abandono, el maltrato físico y sexual y la negligencia familiar son solo algunas de las adversidades que marcan la vida de miles de niños en nuestro País, obligando a muchos de ellos a ser ubicados en orfanatos, albergues o mantenerse en el abandono. Esta dura realidad en la que vivimos como sociedad, da lugar a que los derechos de los niños, en muchas ocasiones, sean vulnerados.

La Adopción no se reduce solamente a una ficción jurídica; debe ser un compromiso que involucre la voluntad de muchas personas, que participan activamente para que una adopción sea posible.

De esta manera, el objetivo primordial de la adopción debe ser el aseguramiento del bienestar del menor, niño o niña, cuando sus padres naturales, por algún motivo, sean incapaces de criarlos y educarlos; tal como lo consagra la ley.

Adoptar un niño o niña conlleva el interés de proporcionarle al menor una nueva familia que le brinde la posibilidad de crecer con la protección, con el amor, y cuidados que amerita.

CAPITULO II

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes Históricos de la Adopción

En las últimas épocas, el origen de la adopción ha obedecido a razones religiosas, políticas y sociales. En los pueblos primitivos, el adoptivo sucedía a los jefes y patriarcas que carecían de descendencia en la función religiosa de rendir culto a sus antepasados.

En el Derecho Romano surge la adopción reglamentada y ordenada sistemáticamente. La institución permitió a quienes no tenían hijos o deseaban tener más, incrementar el patrimonio familiar, asegurar la conservación del culto a los dioses e impedía la extinción de la familia, contribuyendo a su permanencia y prolongación, la cual era una exigencia de la necesidad política en la ciudad.

El pater familia requería que, a su muerte, su autoridad se transmitiera a quien lo sucedería con todo su alcance. (Jurídico, político y religioso).

Fue utilizada para establecer la sucesión en el trono por algunos emperadores, como por ejemplo Nerva respecto de Trajano, Antonio Pío de Marco Aurelio y Justino que adopta a su sobrino Justiniano, al no tener descendiente, quien lo sucedería en el Imperio Romano de Oriente.

En el Derecho Justiniano se observa la regulación formal de la institución, mediante el diseño de un proceso que se celebra ante la autoridad. Control estatal que hasta ahora ha existido, caracterizando la adopción como una institución de derecho público y colectivo.

Adoptante, adoptivo y el padre se presentaba ante el magistrado, manifestando su voluntad de realizar el acto y conforme al cumplimiento de algunos requisitos elementales, como la edad del adoptante y el adoptado.

En el Derecho Germano, la adopción no tuvo gran importancia; su principal finalidad era guerrera, se procuraba dar a quien carecía de descendencia un sucesor en su actividad guerrera. Se transportaba la autoridad militar de caudillo al adoptado; a éste se le exigía el haberse destacado como guerrero.

Cuando el Derecho Germánico entra en contacto con el Derecho Romano, la adopción destaca como medio ideal para reemplazar la sucesión testamentaria.

Luego, con la admisión y desarrollo de la sucesión testamentaria decayó, por ser innecesaria. No tenía que acudir a ella para tener herederos.

En el Derecho Medieval, la adopción perdió su prestigio. No recibió acogida entre la nobleza. El adoptado no podía suceder en los feudos, ni los fideicomisos, ni adquiría títulos de nobleza, ni armas gentilicias.

Se acudía a esta figura en aquellos casos en donde existían beneficios. No se admitía que hijos provenientes de villanos y plebeyos se mezclaran con las familias de los señores. No hubo adopción en esta clase social.

La Adopción se utilizó con salvaguarda frente a los efectos de la guerra; se adoptaba con el fin de reemplazar al guerrero muerto; el adoptado adquiría la sucesión bélica; tenía que continuar la actividad guerrera de adoptante.

La regulación de la Adopción, en lo que respecta a los requisitos y procedimientos, se mantuvo en el ámbito público: es una ficción jurídica por imitación de las consecuencias jurídicas de la procreación, división de la adopción plena y la semiplena cuando se realizaba en personas sujetas a la patria potestad de sus padres naturales; sólo era necesaria la manifestación del consentimiento del adoptante, del padre del adoptado y que no existiera oposición.

En el antiguo Derecho Francés, la figura de la adopción estuvo al margen de sus costumbres y se hallaba prácticamente extinguida hasta el advenimiento de la revolución, que en su momento se intentó restablecer por distintas razones, una de ellas esencialmente política; la necesidad de Napoleón Bonaparte de asegurar la descendencia que la naturaleza le demoraba dar.

En la Etapa de elaboración del Código Civil de 1804, Bonaparte sostuvo el principio de irrevocabilidad, que lo lleva a excluir la adopción de menores y limitarla solo a los mayores de edad que podían dar su consentimiento desde el inicio.

El interés de la adopción era individualista, buscaba suplir la falta de hijos y dar consuelo a los adoptantes.

Esta regulación de la adopción decayó, y no fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando las bajas en el ejército dejaron gran cantidad de familias destruidas que trajo como efecto un gran número de niños huérfanos.

En Italia y Francia se dictaron leyes que permitían la adopción de menores de edad, caracterizada por la transmisión de la patria potestad al adoptante.

2.2. Conceptualización de términos

2.2.1. Adopción:

Es tan antigua como la misma humanidad, toda vez que a través de la historia siempre han existido menores e incapacitados sin padres, que se encuentran desamparados, y gracias a hombres justos que buscan a un ser donde desbordar su amor filial, proteger y cuidar, aceptándolo como si fuesen hijos propios, generando lo que hoy conocemos como Adopción.

La palabra adopción descende de la palabra adoptar que proviene de los vocablos latinos *Adoptare* que significa: recibir como hijos, y de *Optare* que es desear. Por lo tanto, podríamos comprender como adoptar; según Antonio de Ibarrola: *“recibir como a un hijo a aquél que se desea”*.

Para el jurisconsulto español, Albadengo (1997), define la adopción de la siguiente manera:

“ La adopción es un acto solemne que da al adoptante como hijo al adoptado, creándose así como un vínculo de parentesco puramente jurídico, pero por disposición legal con igual fuerza y efectos que si fuera de sangre” (pág. 573).

Observando la adopción desde un punto de vista jurídico, nos encontramos con algunos estudiosos del derecho que se abocan al tema tal como, **José Puig Brutau**, quien conceptúa la adopción como:

“El acto jurídico que se crea entre dos personas, un vínculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas, pero no idénticas, a las que resultan de la paternidad y filiación legítimas; o como el negocio jurídico que se establece entre adoptante y adoptado una relación jurídica en cierta medida semejante a la Paterno Filial”.

Otro autor, como Rafael de Pina, nos dice que la adopción es:

“Un acto jurídico que crea entre el adoptante y el adoptado un vínculo de parentesco civil que se deriva en relaciones análogas a las que resulta de la paternidad y filiación legítimas”.

En lo que respecta a **Sara Montero Duhalt**, nos señala que la adopción es:

“Una Institución jurídica que tiene por objeto crear relación de filiación entre dos personas que no son entre sí, progenitor y descendiente consanguíneo, entendiéndose con esto que son personas que no tienen ningún lazo de sangre”.

La Adopción es una institución de orden jurídico orientada primeramente a tratar de solucionar el problema social de la niñez desamparada y, en segundo término, a dar las satisfacciones de una paternidad no lograda a muchas personas que, teniendo medios económicos, pueden dar a un menor desamparado el calor de un hogar y la educación a que tiene derecho.

Según Rodríguez Carretero, citado por el profesor Monroy Cabra, señala que:

“La adopción se origina en el nacimiento de un conjunto de relaciones jurídicas entre las partes, que son el padre y madre adoptantes y el hijo adoptado”.

Igualmente se han pronunciado al respecto de la entidad de la institución de la adopción, profesores como **Planiol y Colin**, quienes defienden la tesis de que la adopción no es una ficción sino que en realidad viene a ser *“una realidad psicológica-social”*.

Es decir, que la adopción es un medio de protección para el menor de edad que se encuentra abandonado y además, que la paternidad y la maternidad no se encuentra fundamentada exclusivamente en vínculos de sangre, sino que también reposa en aspectos morales, sociales y familiares.

2.2.2. Adoptante:

Persona mayor de dieciocho años que cumple con los requisitos y los procedimientos establecidos en la presente Ley para adoptar a un hijo o hija de otra persona, con la finalidad de otorgarle todos los derechos y beneficios que la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley otorgan a los hijos e hijas consanguíneos.

2.2.3. Adoptado:

Persona que, no siendo hijo o hija por consanguinidad, lo es conforme a los términos establecidos por la Ley.

2.2.4. Autoridad Central:

Entidad responsable de realizar la investigación y los trámites administrativos concernientes a la adopción nacional e internacional. Conforme al Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de adopción internacional, es el ente encargado de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone al Estado contratante en materia de adopciones.

2.2.5. Acogimiento pre Adoptivo:

Es el cuidado integral brindado por la futura familia adoptante asignada al niño, niña o adolescente dentro del procedimiento de adopción, por un período determinado conforme a lo establecido en la Ley.

2.2.6. Estado de Adoptabilidad:

Declaración judicial que establece la privación del derecho a la familia del niño, niña o adolescente y que ordena su restitución a través de la adopción, en los términos establecidos en la Ley.

2.2.7. Familia ampliada:

La que comprende a todas las personas naturales unidas por el vínculo de parentesco por consanguinidad, por afinidad o por adopción con el niño, niña o adolescente que no sean su padre, su madre o sus hermanos, y a las personas que mantengan con la persona menor de edad una relación equiparable a la familiar, de acuerdo con los usos y las costumbres locales y nacionales.

2.2.8. Familia Biológica o de Origen:

Es el conjunto de personas unidas por el vínculo de parentesco, en sentido restringido, La familia está formada por el padre, la madre y los hijos, pero en sentido amplio, la familia comprende a los descendientes de los hijos que surgen cuando éstos forman nuevas familias.

2.3. Principios de la Adopción:

La adopción se rige por los siguientes principios; los que se aplicarán en atención a:

1. Al interés de la persona adoptada, que consiste en el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la República de Panamá, los instrumentos internacionales de promoción, protección y defensa de los derechos humanos vigentes en la República de Panamá y las Leyes nacionales.

2. Interés superior del niño, niña y adolescente, cuyo objetivo es asegurar la protección del derecho de éstos a permanecer y a convivir en el seno de su familia biológica o, en caso de no ser esto posible, en otro medio familiar permanente.
3. Es la última medida de protección que se aplicará para el restablecimiento del derecho a la convivencia familiar del niño, niña y adolescente.
4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o adolescente, con excepción de abuelos y hermanos, quienes no podrán adoptar a su nieto o hermano, respectivamente.
5. Primacía de la adopción nacional sobre la internacional, que sólo procederá cuando no sea posible la nacional.
6. Se preferirá, en las solicitudes de adopción internacional, a los nacionales panameños sobre los extranjeros, aun cuando sólo uno de los cónyuges o convivientes sea panameño.
7. Los contenidos en el Convenio relativo a la protección del niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional y la Convención sobre los Derechos del niño.

2.4. Teorías y Doctrinas sobre la Adopción

2.4. 1. Teorías:

La naturaleza jurídica de la adopción ha variado con el tiempo según la doctrina, pudiéndose reconocer actualmente cuatro teorías que la fundamentan:

2.4.1.1. La contractual, que deja a la voluntad de las partes su formulación.

Podemos señalar a **Planiol y Ripert, Colin y Capitant**, quienes definen como un “Contrato Solemne”, concluido entre el adoptante y el adoptado. Prima en esta concepción el espíritu romanista, civilista, del acuerdo de voluntades del consentimiento, y el concepto que dominó la estructura familiar, de los “derechos poderes”, el interés del padre de familia, prescindiendo del interés del hijo de familia, del menor.

Para el jurista argentino, Lowis Josserand (1952), la adopción sería lo siguiente:

**“La adopción en efecto es un contrato que crea entre dos personas relaciones puramente civiles de paternidad o maternidad y filiación”.
(pág. 558).**

2.4.1.2. La Teoría del Acto Condición:

La adopción no es considerada como un contrato, sino como un acto jurídico, Los actos condición confieren a la persona una situación jurídica especial por el simple hecho de prestar

su consentimiento. Esto quiere decir que no se aplican las disposiciones legales, sino sólo aquéllos que señala la ley.

Entre los que apoyan esta teoría están: Eduardo Rodríguez Piñares, Gambón Alix y Castán Tobeñas.

Eduardo Rodríguez Piñares (1919) expresa que:

“La adopción es un acto jurídico solemne, celebrado con previo autorización judicial por cuyo medio se crean entre dos personas, relaciones de familia análogas a las que resultarían de la filiación legítima”. (pág. 283).

2.4.1.3. La Teoría de institución:

Para unos de Derecho Privado, para otros de Derecho de Familia, y para terceros, los Derechos de Menores. Los primeros señalan que es una institución fundada en un acto de voluntad del adoptante, nacida de la sentencia del juez en virtud al cual se establece entre dos personas una relación análoga la que surge de la filiación matrimonial análoga; más no igual, por tener características singulares.

Los segundos indican que el vínculo adoptivo es una institución del derecho de familia, y descansa en ese aspecto del derecho público que tiene todo el derecho de familia, y los terceros preconizan que la adopción es una institución del derecho de menores. La adopción

es entendida así como la institución jurídica solemne y de orden público, que crea entre los individuos relaciones de paternidad y filiación.

2.4.2. Doctrinas:

Actualmente existen dos doctrinas referentes al menor: una es la denominada de la Situación Irregular y otra de la Protección Integral. Ambas doctrinas tienen un objetivo común y es la de protección integral del niño para lograr su pleno desarrollo y sus más claras potencialidades que lo conviertan en un sujeto que ofrezca una contribución eficiente de una sociedad en democracia, libertad, justicia e igualdad.

2.4.2.1. Doctrina de la situación irregular:

Esta doctrina, sustentada desde tiempos atrás con el surgimiento del llamado Derecho de Menores y avalada entre otros instrumentos internacionales por la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, preconiza, en primer lugar, la protección no solamente del niño en situación irregular, sino también del menor, que por razones de conformación fundamentalmente, de la familia en que conviene, se desvíe de la regla normal impuesta por la sociedad.

La Doctrina de la Situación Irregular protege fundamentalmente al niño; para unos, desde el mismo momento de la adopción. Para otros, desde el mismo momento del nacimiento y cuando tiene figura humana. El niño es protegido porque no es un ser totalmente

independiente. Vemos que desde el momento cuando es concebido, él dispensa protección de la madre en diversas etapas del embarazo, el parto y post parto, dado que se le garantiza derecho a ser amamantado por su progenitora.

La protección también comprende a la familia, viéndola desde el ámbito nuclear: es decir, formada por padres e hijos.

2.4.2.2. Doctrina de la Protección Integral de las Naciones Unidas.

Esta doctrina coloca a la infancia como objeto pasivo de la intervención del Estado, sin derecho a expresar su opinión respecto a sus necesidades y sentimientos.

Esta posición fue reiteradamente cuestionada por juristas y movimientos sociales y finalmente superada totalmente a partir de la aprobación, en 1989, de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este instrumento jurídico coloca a niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y promueve, junto con otros instrumentos de las Naciones Unidas, la doctrina de la protección integral.

Para Emilio García Méndez: Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina: de la Situación Irregular a la Protección Integral. *Santa Fe de Bogotá, Forum Pacis, 1994. Pp.11*), *considera que:*

"La Doctrina de la protección integral de las Naciones Unidas, involucra al universo total de la población infantil-juvenil. Esta doctrina incluye todos los derechos individuales y colectivos de las nuevas generaciones, es decir, todos los derechos para todos los niños. Esta situación convierte a cada niño y a cada adolescente en un sujeto de derechos exigibles. Para nosotros, adultos, el reconocimiento de esta condición se traduce en la necesidad de colocar las reglas del estado democrático para funcionar en favor de la infancia."

2.5. Naturaleza Jurídica de la Adopción:

Sobre este aspecto, debemos tomar en cuenta que crea un estado civil, el cual podemos considerarlo como el lazo más estrecho que puede existir entre los hombres, cristalizada por la relación paterno- filial.

Respecto a su naturaleza jurídica, la doctrina plantea diversos criterios: entre ellos; la autora Sara Montero Duhalt (1997), señala:

"La adopción es un acto jurídico plurilateral, mixto, solemne, constitutivo a veces, de efectos privados y de interés público". (pág. 128.)

Señala que es un acto jurídico, porque es una manifestación de voluntad que produce consecuencias jurídicas que persiguen cumplir con el de sus autores. Así mismo, considera que es plurilateral, ya que intervienen más de dos voluntades; mixto, porque pueden intervenir sujetos particulares, como representantes del Estado.

La naturaleza jurídica de la adopción ha variado con el tiempo y cambios cruciales, éstos en la actualidad los vemos proyectados en atención a una serie de teorías, que a continuación se describen:

2.5.1. La Teoría Contractual: La misma deja a voluntad de las partes su formulación.

Planiol, Ripert, Colin y Capitant la definen como un contrato solemne concluido entre adoptante y el adoptado.

En esta concepción prima el espíritu romanista, civilista, del acuerdo de voluntades, basado en el consentimiento, donde el concepto que domina radica en la estructura familiar del hijo de familia, considerado el menor.

Para el jurista Argentino Lowis Josserand (1952):

“La adopción en efecto es un contrato que crea entre dos personas relaciones puramente civiles de paternidad o maternidad y filiación”. (pág. 558).

Para que la adopción proceda, es necesario el consentimiento del adoptante y del que represente al adoptado; hecho éste que le da la naturaleza contractual a la figura.

En el Código Napoleónico encontramos las primeras legislaciones que regularon la adopción, el cual señala, que se requería el consentimiento de las partes intervinientes en el acto, para que el mismo fuera válido.

Carrillo (1975) y otros doctrinarios panameños expresan que:

“La adopción tiene una naturaleza contractual, aunque por pertenecer al derecho de familia se encuentra sumamente limitada, lo que se justifica plenamente por su trascendencia social”. (pág. 211).

2.5.2. Teoría de Acto Condición:

Los autores que siguen esta tendencia consideran la adopción como un acto jurídico especial. El acto jurídico se puede definir como todo hecho voluntario creado por la persona humana, tendiente a producir el nacimiento, la modificación o extinción de las relaciones jurídicas, conforme a éstas.

La teoría del Acto – Condición se inclina por considerar que la adopción no constituye un contrato, sino un acto jurídico.

Los actos condición confieren a la persona una situación jurídica especial por el solo hecho de prestar su consentimiento. En otras palabras, no se aplican las disposiciones legales, sino solamente aquellos que la norma contempla.

Los autores Julio Armando y Doldo Tristlan se identifican con esta teoría, señalando a la adopción como un acto jurídico sometido a formas particulares, por medio de las cuales los interesados ponen en movimiento en su provecho la institución de la adopción.

Por su parte, Eduardo Rodríguez Piñares (1919) expresa que:

“La adopción es un acto jurídico solemne, celebrado con previo autorización judicial por cuyo medio se crean entre dos personas, relaciones de familia análogas a las que resultarían de la filiación legítima” (Pág.283.)

Para Germán Gambón Alix (1966), propulsor de esta teoría, la adopción viene a ser:

“Un acto por el cual se crea un parentesco especial que tiende a equivaler al de consanguinidad en línea recta” (Pág. 70).

Podemos decir entonces que nuestro ordenamiento sigue estas dos tendencias: una contractual y el acto – condición, destinadas especialmente al menor de edad.

2.5.3. Teoría de la Relación Jurídica:

Esta es una teoría que responde a todas las concepciones procesalistas. La Relación Jurídica la podemos definir como un vínculo de derecho que existe entre dos o más personas, o entre una de ellas, al menos con trascendencia en el ordenamiento vigente.

Los que interpretan la adopción como una relación jurídica, señalando que la misma se da a través de un proceso de adopción. Aunque la adopción requiera de un proceso para hacer que se constituya este vínculo jurídico de la filiación, el proceso es un instrumento para concretizar nuestra norma sustantiva.

2.5.4. Teoría Institucionalista:

Es aquella que considera a la adopción como una institución jurídica, basada en que el estado civil de las personas no se puede dejar a la libre voluntad de las partes y requiere, para su perfeccionamiento, de la intervención judicial.

Diversos juristas consideran que la adopción tiene un carácter de institución jurídica creadora, mediante la intervención judicial de vínculos de parentesco entre las partes. Además la elevan a la categoría de orden público.

En cuanto a los vínculos de parentesco, en nuestra legislación no existe diferencia entre los hijos nacidos en legítimo matrimonio, y entre el adoptado y los hijos biológicos.

Para la teoría Institucionalista, el Estado juega un papel fundamental en la regulación y legislación de la adopción, estableciendo los requisitos necesarios para la celebración del acto, así como su factibilidad y sobre quien admite o rechaza la solicitud presentada.

Pasaremos a analizar la Teoría Institucionalista en diferentes derechos:

2.5.4.1. Institución de Derecho Privado.

Se entiende la adopción como una institución de derecho privado fundada en un acto de voluntad del adoptante, nacido de la sentencia del juez, en virtud de lo cual se establece, entre personas, una relación análoga que surge de la filiación matrimonial.

2.5.4.2. Institución de Derecho de Familia

Las razones por las cuales se considera la adopción como una institución de derecho de Familia son muy fáciles de entender, si partimos de la afirmación de que la adopción crea un Estado de Familia.

La Adopción es una Institución del Derecho de Familia, concibiéndola como institución protectora de menores. La realidad social exige que se mire la figura de la Adopción en función del menor; es decir, buscando su protección.

La adopción es, pues, una institución de orden jurídico que persigue en un primer nivel la solución al problema del desamparo, abandono o maltrato del menor y, en un segundo nivel, el hecho de que es el medio para que aquellos que no se han podido realizar como padres, lo hagan.

Dada la adopción, sus normas serán de orden público, y una vez manifestada la voluntad individual, por parte del adoptante, no podrá actuar libremente, sino de acuerdo con la norma a la cual se somete mediante un procedimiento que tendrá como resultado, una sentencia constitutiva de la figura de la adopción.

2.5.4.3 Institución de Derecho de Menores.

La Adopción es una institución del Derecho de Menores, ya que se inclina por una autonomía del mismo.

La tendencia que buscamos, como ya hemos señalado anteriormente, es la protección del menor.

2.6. Diferencias con la Filiación:

La Filiación es el resultado de la concepción de la mujer, realizada dentro del matrimonio o por fuera de él. La adopción es una ficción del derecho, en virtud de la cual se crea una relación semejante a la que existe entre padres e hijos; la filiación da origen a un parentesco de sangre, mientras que la adopción es fuente de una relación eminentemente civil o legal.

El artículo 235 y 236 del Código de la Familia y el Menor nos señala esa diferenciación:

Artículo 235:

“La Filiación es la relación existente entre el hijo o la hija y sus progenitores. En relación a la madre, se le denomina maternidad. En relación al padre, se le denomina paternidad”.

Artículo 236:

“La filiación puede tener lugar por consanguinidad o por Adopción. La filiación por consanguinidad y por adopción surgen los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código”.

2.7. Diferencias con la legitimación

La adopción representa una institución en la que mediante una sentencia del juez, trata de suplir lo que no se logró a través de la naturaleza. La legitimación implica un beneficio en el que se iguala al hijo legítimo concebido dentro del matrimonio, con el concebido fuera del matrimonio siendo éstas las posturas sustentadas:

- a) La adopción puede recaer indistintamente sobre los hijos matrimoniales o extramatrimoniales. La Legitimación, por el contrario, es un beneficio reservado a los

hijos habidos fuera del matrimonio, pero legitimados por el posterior al que puedan contraer sus padres.

- b) El hijo legitimado adquiere los mismos derechos y las mismas obligaciones que el hijo legítimo, a partir de la sentencia de adopción. La legitimación produce efectos a partir de la celebración del matrimonio.

2.8. Formas de Adopción

2.8.1. Adopción Conjunta e Individual:

2.8.1.1. La Adopción Conjunta:

Es aquella adopción que se realiza por solicitud de los cónyuges, en donde el niño o niña adoptada no es hijo de ninguno de los solicitantes.

Es importante señalar que la palabra cónyuge se define como el marido o consorte respecto a su esposa y viceversa.

Cabe destacar que si durante el trámite de adopción conjunta, surge demanda de separación o de divorcio y se produce la separación, se suspenderá el trámite y se ordenará el cierre y archivo del expediente.

La Ley 61 de 12 de agosto de 2008, en su Artículo 25 señala que:

“La adopción será conjunta cuando las personas solicitantes sean cónyuges o convivientes en unión de hecho. En este caso, si uno de los cónyuges o de los convivientes en unión de hecho desiste antes de producirse la adopción, se dará por concluido el trámite de la adopción”.

Por su parte, el Código de la Familia y del Menor, en su Artículo 290 E, sobre este aspecto, manifiesta que:

Artículo 290 E:

“Tratándose de matrimonios, la adopción conjunta se efectuará cuando los cónyuges, demuestren, ante la Dirección Nacional de Adopciones, una convivencia funcional, ininterrumpida por un periodo mínimo de dos años”.

Cuando uno de los adoptantes falleciera durante el proceso de adopción, se podrá continuar el trámite iniciado por ambos solicitantes hasta culminarlo.

También se dará por concluido el Proceso de Adopción, si surge una demanda de separación de cuerpos, divorcio o la separación de la convivencia, sin perjuicio de que se pueda optar por la adopción individual posteriormente.

2.8.1.2. Adopción Individual.

La adopción individual es aquella que es realizada por solicitud de un solo individuo; es decir, un hombre o una mujer adoptada a título individual a otra persona con sujeción a los requisitos que exige nuestro derecho.

Sobre este aspecto, nuestra normativa en su Artículo 290 D, señala lo siguiente:

Artículo 290 D:

“La adopción puede ser conjunta o individual. Es individual cuando se decreta por solicitud de un único adoptante, y es conjunta cuando se decreta por solicitud de un matrimonio o unión de hecho que cumpla con los requisitos del artículo 53 de este Código”.

Por su parte, la Ley 61 de 12 de agosto de 2008, en el Artículo 25 expresa lo siguiente:

“Excepcionalmente, podrán adoptar las personas solteras, cuando así lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, como lo define la presente Ley, en cuyo caso la adopción será constituida en forma individual”.

En nuestro derecho no está regulado expresamente el supuesto de la adopción individual por parte de persona que se encuentre casada o unida en matrimonio de hecho; sin embargo en nuestro Código encontramos disposiciones que permiten esta forma particular de adopción individual.

En el Artículo 296, Numeral 2 del Código de Familia, se establece una prohibición para adoptar, cuando es realizada por un cónyuge sin el consentimiento de su consorte, por lo cual debemos entender que si se otorga el consentimiento por parte del cónyuge que no adopta, en el sentido de permitir que su consorte adopte individualmente, la misma se podría dar.

2.9. Tipos de Adopción

2.9.1. Adopción Nacional:

La adopción será nacional cuando las personas solicitantes tengan o posean la nacionalidad panameña y su domicilio habitual se localice en el territorio nacional, o sean extranjeras con más de tres años con domicilio habitual en el País.

2.9.2. Adopción Internacional

La adopción internacional o adopción entre países se configura cuando los adoptantes y los adoptivos no tienen la misma nacionalidad o cuando el domicilio habitual de los adoptantes y el del niño se encuentra en países diferentes.

Esencialmente, se concibe la adopción internacional como medida permanente de protección de menores “basada en el interés del niño y que debería ser excepcional”.

En el Artículo 21 de la Convención de Los Derechos del Niño se contemplan las normas fundamentales que garantizan el interés superior del menor en esta clase de adopciones. Según el citado artículo, los Estados partes que reconocen o permiten el sistema de adopción deben cuidar que ese interés superior sea la consideración primordial.

2.10. Sujetos en el Proceso de Adopción

2.10.1. Persona Adoptada:

Se considera susceptible de ser adoptado el menor de edad declarado en abandono, mediante Resolución Judicial. Es requisito esencial contar con el consentimiento del adoptado, en función de su edad y madurez.

Podrán ser objeto del Derecho de Adopción:

1. Las personas menores de dieciocho (18) años, cuando el Juez competente haya declarado su estado de adopción y determine que se restablezca el derecho a la familia, a través de esta figura.
2. La persona mayor de edad que haya convivido y mantenido vínculos afectivos familiares con las personas adoptantes, y haya convivido por un período mínimo con ellos de dos años antes de que hubiese cumplido la mayoría de edad.

En tales casos, el niño, niña o adolescente deberá ser escuchado durante el proceso de adopción y expresar sus opiniones, las que serán valoradas de acuerdo con su grado de madurez y desarrollo.

En cuanto a la adopción de hermanos, se procurará que no sean separados, antes ni durante el procedimiento de adopción. De ser posible, sean adoptados por una misma familia. Se tomará en cuenta la manifestación, la opinión y/o el consentimiento del niño, niña o adolescente de permanecer con sus hermanos como una condición para decretar la adopción.

Siempre que se hayan evaluado todas las posibilidades de lograr la adopción conjunta de los hermanos y sobre la base del principio del respeto de los derechos y garantías del niño, niña o adolescente, la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones podrá solicitar adopciones por separado, en cuyo caso las personas adoptantes estarán obligadas a mantener la comunicación entre los hermanos.

2.10.2. Persona Adoptante:

Persona Adoptante son preferentemente los cónyuges o la persona natural, mayores de edad, que expresen de manera formal, indubitable y por escrito su deseo de adoptar un menor de edad declarado en abandono judicial, dirigiendo sus deseos ante la oficina de adopciones.

Las Personas Adoptantes podrán ser:

1. Mayores de edad, legalmente capaces y en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
2. El hombre y la mujer unidos, que hayan cumplido dos años de matrimonio o de unión de hecho, siempre que exista consentimiento de ambos.

En caso de adopción de personas menores de edad, además de los requisitos anteriores, el adoptante deberá estar domiciliado en la República de Panamá o en uno de los Estados que haya suscrito el convenio relativo a la protección del niño, y a la cooperación en materia de Adopción Internacional.

2.11. Aspectos Legales.

Actualmente, nuestra Legislación concibe la adopción como una institución jurídica de integración familiar, de orden público y de interés social a favor del hijo (a) que no lo es por consanguinidad.

De ninguna manera, la voluntad libremente, expresada por los padres para la adopción de sus hijos, debe constituir una transferencia o renuncia de deberes y derechos que derivan de la patria potestad. De allí, la necesidad de velar por las circunstancias bajo las cuales se otorga el consentimiento de los padres en la adopción de sus hijos, garantizando que se realicen bajo un

control jurisdiccional en el que se cumplan todas las disposiciones que garantizan su respuesta, única y exclusivamente, basada en el interés superior del menor.

2.11.1. La Actuación del Estado como Garante del Interés Superior del Menor.

La actuación del Estado puede garantizar o afectar el interés superior del niño. “Asume formas beneficiosas cuando, con una visión preventiva, presta apoyo y asistencia a la familia para que pueda cumplir su función de crianza y educación de los hijos, asistencia que no solo debe limitarse al aspecto económico, sino que comprende la orientación, educación e incluso, la acción terapéutica.

Esa actuación resulta “intrusiva, si en razón de la extrema pobreza o marginalidad de los padres se aparta al niño de su familia. En este caso, la intervención del Estado en lugar de favorecer el bienestar del hijo, puede perjudicarlo; pues, lo separa de su medio, el cual, aunque deficiente, le permite conservar sus afectos”.

Con respecto a esto, se puede mencionar que el Estado tiene el deber de velar por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los hijos. Así el artículo 18.3 de la convención de los Derechos del Niño, dispone:

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan, tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”.

El artículo referido es el marco legal para que en el orden jurídico nacional se consagren disposiciones legales que garanticen la continuidad de la familia, como grupo humano básico.

2.12. Personas que otorgan el consentimiento para la adopción de los niños y niñas:

1. Los Padres, Tutores u otros Representantes:

El consentimiento que se otorga para la adopción de los menores, en principio corresponde a los padres. Estas son las personas que ostentan la patria potestad y no pueden conservarla conjuntamente con los padres adoptivos.

La misma se extingue definitivamente cuando son inhabilitados. Por lo que le corresponde prestar el consentimiento para la adopción a ambos o a uno de ellos. En caso de ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, el consentimiento lo otorgará el que en su lugar la ejerce con exclusividad.

En caso de desacuerdo, el padre que no preste su consentimiento tiene que asumir el ejercicio de la patria potestad con todos sus deberes y proporcionarle el medio familiar al cual el niño o niña tiene derecho como garantía fundamental. Si se trata de un padre o madre maltratante o incumplidor de sus deberes, se le podrá inhabilitar; así bastará el consentimiento que preste el otro progenitor.

2.13. El consentimiento que se otorga para la adopción del niño o niña que está por nacer.

Nuestro Código de Familia, en su Artículo 290 F, desconoce la validez a esta clase de consentimiento.

La disposición tiende a impedir conductas ilegítimas, tales como el alquiler de vientres y el tráfico ilícito de menores. La integridad y dignidad del niño está protegida legalmente desde su etapa prenatal.

Es muy difícil encontrar adopciones consentidas de un hijo o hija que está por nacer. Lo que en realidad puede que exista, son concertaciones para dar en adopción al concebido, una vez que ha nacido.

Es una cuestión que generalmente queda al margen del conocimiento de la autoridad; pues, el consentimiento en estos casos se materializa o formaliza luego de que la progenitora ha dado a luz a su hijo. En este aspecto, hay que considerar, si es justificable o no, que una madre, víctima de violación carnal, consentida que su hijo sea adoptado cuando nazca.

El derecho a la vida que tiene todo ser humano sustenta la razón para contemplar que, excepcionalmente bajo tales circunstancias, se permita esta forma especial de proceder a la adopción, evitando las incidencias de abortos, como salida.

2.14. Efectos de la Adopción

En cuanto a los efectos de la adopción, en primer lugar, a través de su existencia, se da la creación del parentesco entre la persona adoptante y la persona adoptada; igual al existente entre el padre o la madre y las hijas o hijos biológicos. De este vínculo surgen los mismos derechos y deberes que los del parentesco por consanguinidad.

Nuestro Código de la Familia y el Menor, en su artículo 310, señala lo siguiente:

Artículo 310:

“La Adopción crea vínculos jurídicos, afectivos y de parentesco entre el adoptante o la adoptante y el adoptado o la adoptada, igual al existente entre el padre o la madre y la hija o hijo biológico, vínculos de los cuales se derivan los mismos derechos y deberes del parentesco por consanguinidad. Este parentesco legal se extiende a los descendientes del adoptado o de la adoptada y a la familia del adoptante o de la adoptante o de los adoptantes.”

En el caso de personas menores de edad, se establecen entre la persona adoptante y la persona adoptada todos los derechos, atributos, deberes responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación parental o patria potestad.

Este parentesco legal se extiende a los descendientes del adoptado y a la familia de las personas adoptantes.

2.14.1. Extinción del vínculo jurídico familiar con la familia biológica o de origen.

La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su familia de origen.

El vínculo jurídico familiar, creado por la adopción, es definitivo, indivisible, irrenunciable e irrevocable. La muerte del adoptante o los adoptantes no restablece la patria potestad o relación parental de la madre o el padre biológicos del adoptado.

No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de parentesco consanguíneo, extinguidas y demás derechos y prohibiciones establecidas en esta Ley y en las demás leyes.

En cuanto a alguno de los efectos que produce la adopción de menores, lo encontramos contemplado en el artículo 9 literal b de la Ley N° 105 de 30 de diciembre de 1998, por el cual se aprueba la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, el cual nos señala lo siguiente:

Artículo 9:

“En caso de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines:

....

b. Los vínculos del adoptado con su familia de origen se considerarán disueltos; sin embargo, subsistirán los impedimentos para contraer matrimonio”.

Además, se configuran otros efectos, a saber:

1. En cuanto al nombre del menor, solo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres años, o consienta en ello el juez, encontrando justificadas las razones de su cambio. Ello quiere decir que los apellidos de sangre se reemplazan por los de los adoptantes o los del adoptante; el nombre de pila puede conservarse o modificarse.

El adoptado o la adoptada ostentarán los apellidos de su adoptante o adoptantes, sin perjuicio de que se mantenga en confidencialidad su origen biológico en la Dirección General del Registro Civil correspondiente. A esta información solo podrá tener acceso el adoptante o la adoptante o el adoptado o la adoptada cuando cumpla la mayoría de edad o antes si es acompañado por sus padres adoptivos.

En relación con el nombre, el Juez o la Jueza determinarán si se justifica o no el cambio, de acuerdo con el interés superior del menor.

2. Potestad del adoptante: Otorgada legalmente la escritura de adopción, el adoptado queda bajo la potestad del adoptante, suspendiéndose la patria potestad ejercida por el padre o la madre legítimos o naturales.

El matrimonio posterior del adoptante no modifica esta situación, subsiste aún en el caso de que la mujer adoptante contraiga matrimonio posterior a la perfección de la adopción.

3. Obligaciones Recíprocas: El adoptante y adoptado adquieren las mismas obligaciones y derechos que la ley asigna a los padres e hijos legítimos, denominados comúnmente por la doctrina tradicional, como autoridad paternal.

En consecuencia, el adoptante o adoptantes deberán al adoptado los derechos de crianza, educación y establecimiento; mientras que el adoptado está obligado a cumplir con el consiguiente respeto y obediencia para con los padres adoptivos.

4. Impedimento Matrimonial: El parentesco a que da nacimiento la adopción origina una causal de nulidad del matrimonio entre adoptante y adoptado.

5. Entre otros efectos, se pueden señalar:

- Rompe vínculos con la familia biológica
- Crea vínculos de filiación, similares a los producidos por naturaleza, con la familia adoptiva.
- Es irrevocable.

La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectan al adoptado por causas de las relaciones de parentesco consanguíneo extinguidas y demás derechos y prohibiciones establecidas en esta ley y en las demás leyes.

2.14.2. Efecto Retroactivo:

Una vez decretada la adopción, ésta produce efectos retroactivos a la fecha de la resolución que otorga el acogimiento preadoptivo. En los casos de adopción por parte del cónyuge o conviviente, se produce efecto retroactivo desde la presentación de la solicitud de adopción.

2.14.3. Menores Abandonado, y sus secuelas biológicas

El abandono de un menor viene a ser una causa frecuente que da origen a la figura de la adopción en el marco de una familia. Cabe entonces preguntarnos acerca de las fuentes del abandono de niños. Preferimos utilizar el término fuente y no causa con el fin de evitar concepciones parciales o reduccionistas.

El ser humano nace en estado de absoluta inmadurez, requiere de cuidados especiales y personales para mantenerse vivo. Generalmente, estos cuidados son brindados por la misma persona que lo tuvo alojado en su cuerpo durante los nueve meses de gestación; es, decir su progenitora. De ella dependerá totalmente la decodificación de los signos y señales, en

demanda de satisfacción de sus necesidades básicas, clave esencial para su supervivencia. La madre del menor representa la primera fuente de placer y también de sufrimiento.

Según *Françoise Doltó*, “el niño puede ser abandonado, tanto por falta de deseo materno al no poder hacerse cargo de él, como a causa de factores socioeconómicos, salud deteriorada o en muchos casos debido a la muerte de la madre.

Cuando un niño es abandonado por una madre a raíz de la muerte del parto, se produce la ruptura del primer vínculo humanizador”. Tardará bastante tiempo en establecerlo con otras personas, las que tomarán el lugar de la madre fallecida.

Generalmente, los familiares culpan al menor por la muerte de la madre, demostrando a través de actitudes y sentimientos percibidos por el pequeño: amargas palabras rodean la cuna, llantos y sollozos ahogados a su alrededor, constituyen el triste escenario que enmarca el comienzo de esta vida.

Françoise Doltó expresa que si la madre eligiera antes del parto a una persona que la sustituyera en la función maternal, designándola con nombre y apellido (madrina), el niño poseerá mayor posibilidad de recuperación ante este traumatismo precoz. De lo contrario, quedará en un blanco relacional, sin que pueda restablecerse el vínculo humanizador, decodificador de necesidades.

Cuando una madre abandona a un niño durante la lactancia, éste siente que ella se lleva el pecho que lo nutría, que el pecho ha partido con ella. De tal forma que la boca relacional, el lenguaje del bebé, su nariz, sus labios, la audición, los bronquios y la lengua, pierden la voz, el olor y el estilo táctil materno. Se suprime el vínculo en el cuerpo del niño de esa única adulta que hacía de mediadora entre él y la existencia humana. Este proceso es un destete feroz y deshumanizador, donde la mamada deja de ser el placer conocido y reconocido de él-ella / ella-él.

Cuando revisamos algunos textos acerca del abandono, en todos se reitera el concepto acerca de que un niño no debe sufrir y que por ello debe ser pasado a otros brazos maternos, en el marco de una adopción.

Pasará así a experimentar el encuentro con otro regazo, uno no conocido. Por su parte, la madre adoptiva se encuentra con un niño que no conoce, que no ha gestado ni parido, que no ha pasado de su útero a su regazo, sino que ha llegado de otro regazo hacia el suyo.

El pequeño ser debe realizar un esfuerzo enorme de readaptación a un nuevo olor, una voz nueva, una diferente forma de sostenerlo y acunarlo, ritmos corporales y tonos cardíacos distintos.

Por eso es de fundamental importancia el asegurarle al niño, la certeza de que no volverá a ser víctima de otro abandono (posiblemente aterrador). Para ellos y por ello, es esencial la intervención de la justicia y organismos de minoridad, con estudios especializados que busquen hacer la mejor selección de padres para ese niño desamparado, cuyo futuro tenemos en las manos.

2.15. Procedimiento de Adopción

2.15.1. Constitución de la Adopción:

La Filiación por adopción se constituye mediante de resolución judicial, dictada con la comparecencia personal de los interesados y la intervención del Ministerio Público y del Defensor del Menor, en caso de personas menores de edad. La constitución de la adopción solo procederá cuando concurren las condiciones y procedimientos exigidos por la Ley, existan motivos justificados y ofrezcan ventajas para la persona adoptada.

2.15.2. Procedimiento para la Adopción de Personas Menores de Edad:

Se entiende por procedimiento de adopción de personas menores de edad al conjunto de actos tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia.

Este procedimiento tendrá las siguientes etapas:

1. Preadoptiva de evaluación.

2. Preadoptiva de asignación
3. Preadoptiva de acogimiento
4. Constitución de la adopción
5. Postadoptiva de seguimiento.

2.15.3. Funciones de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones en Materia de Adopciones.

La Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones viene a ser la autoridad competente en materia de adopciones nacionales e internacionales y tendrá las siguientes funciones:

1. Fungir como autoridad central en materia de adopciones.
2. Acreditar y supervisar a los organismos colaboradores en materia de adopción internacional.
3. Evaluar la aptitud de las personas interesadas en adoptar, con el propósito de proveer al niño, niña o adolescente, declarado judicialmente en estado de adoptabilidad, un medio familiar óptimo para su desarrollo integral.
4. Conocer de las etapas preadoptivas y posadoptivas del procedimiento de adopción de niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente es estado de adoptabilidad.

5. Llevar y mantener el Registro Nacional de Adoptantes, así como el Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Estado de adoptabilidad.
6. Verificar que las solicitudes de adopción de las personas adoptantes cumplan con los requisitos legales.
7. Declarar la idoneidad de las personas adoptantes, posterior a la realización de las evaluaciones y los informes técnicos.
8. Presentar los informes de seguimiento al Juez de conocimiento, una vez iniciada la etapa preadoptiva de acogimiento preadoptivo.
9. Realizar el seguimiento posadoptivo de las niñas, niños y adolescentes adoptados.
10. Acreditar y supervisar las entidades y los hogares sustitutos donde se alojen provisionalmente niños, niñas o adolescentes.
11. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de entidades autorizadas para tal efecto, el programa de servicios de apoyo después de la adopción y de acompañamiento a las personas adoptadas que deseen conocer sus orígenes.
12. Elaborar y coordinar planes para propiciar adopciones de personas menores de edad con discapacidad o condiciones especiales de salud.
13. Ejercer otras funciones establecidas por la ley.

2.16. Inicio del Procedimiento de Adopción:

El procedimiento de adopción respecto al niño, niña o adolescente se inicia con la recepción, por la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones, de la resolución judicial que decreta la inhabilitación del ejercicio de la patria potestad de la madre y del padre

biológico y la no existencia de alternativa familiar del menor, ordenándose la restitución del vínculo jurídico familiar, a través de la adopción.

La Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones procederá su inscripción en el registro nacional de niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad.

Con respecto a las personas solicitantes de adopción, el procedimiento se inicia con la recepción, por la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones, de la solicitud por medio de apoderado legal, con la documentación requerida adjunta.

2.17. Solicitud de Adopción:

La solicitud de adopción debe ser presentada, a través de abogado, de forma conjunta o individual ante la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones. Cuando las personas solicitantes de adopción sean cónyuges o convivientes en unión de hecho, la solicitud se hará en forma conjunta. Cuando la persona solicitante sea soltera, la solicitud se hará en forma individual.

2.18. Requisitos de la Adopción:

En los procesos de adopción se exigen una serie de requisitos fundamentales, los cuales se pueden clasificar en requisitos de fondo y requisitos de forma.

2.18.1. Requisitos de Fondo

Los requisitos de fondo son las condiciones exigidas a las partes para que proceda la solicitud. Si no cumple con estas condiciones o requisitos, la adopción no producirá los efectos jurídicos que le son propios.

Entre algunos requisitos de fondo que podemos señalar se encuentran los siguientes:

2.18.1.1. Diferencia de Edad

El de Código de la Familia y del Menor, en su Artículo 291, establece la diferencia de edad que debe existir entre el adoptante y el adoptado.

Artículo 291:

Para adoptar se requiere que el adoptante o la adoptante sea mayor de edad respecto al adoptivo, y que tenga una diferencia de dieciocho (18) años de edad respecto al adoptivo.

2.18.1.2. Mayoría de Edad del Adoptante

La mayoría de edad del adoptante busca establecer la madurez física y psíquica del adoptante, para que así le permita desarrollar el rol que conlleva la adopción.

Es importante que el adoptante cuente con la mayoría de edad, ya que así es responsable de sus actuaciones y consiente de la trascendencia de sus decisiones.

2.18.1.3. Condiciones Afectivas, Morales, Sociales y Económicas de Adoptante

Éstas se encuentran expresamente requeridas en el Artículo 293 del Código de la Familia, que a su tenor expresa lo siguiente:

Artículo 293.

“Los adoptantes han de tener condiciones afectivas, morales, sociales y económicas que los hagan idóneos, para asumir responsablemente la función de padres”.

2.19. Requisitos de Forma:

Los requisitos de forma son las formalidades que se deben cumplir dentro del procedimiento adoptivo, para que así surta los efectos jurídicos que le son propios.

Entre los requisitos de forma que podemos señalar se encuentran los siguientes:

2.19.1. Consentimiento

Lógicamente, siempre se requiere del consentimiento del adoptante. Es decir, de la manifestación de voluntad de la persona que desea adoptar.

El consentimiento es la voluntad que existe entre las partes para crear o producir efectos jurídicos, dirigido a consentir o aprobar la adopción.

Por parte de la adoptada se dan tres supuestos del consentimiento que por su parte debe otorgar.

- En el caso de los mayores de edad lo debe dar él mismo,
- En las adopciones de menores no expósitos, los padres o los que tienen su guarda, y si el menor tiene bienes, el adoptante deberá dar caución del buen manejo de dichos bienes a satisfacción de la persona de quien el adoptivo depende.
- Y el consentimiento dado por los funcionarios jefes de las instituciones donde se encuentran los menores abandonados.

2.19.1.1. Formalidades y Requisitos para la Manifestación del Consentimiento en el Proceso de Adopción:

El consentimiento para realizar la adopción debe reunir una serie de requisitos y condiciones que convierten la adopción en un acto jurídico formal.

Por otro lado, los progenitores, el tutor o cualquier persona que tenga la representación del niño o niña deben prestar dicho consentimiento libremente, sin presiones ni contrapartida material o de otra índole.

Lógicamente, debe entenderse que tales limitaciones están encaminadas a impedir el tráfico ilícito de menores. Cabe destacar que se trata de prohibiciones, cuya transgresión resulta sumamente difícil de comprobar.

2.19.1.2. El Asesoramiento de los Padres Biológicos; Adoptivos y de Todas las Personas de las Cuales se Requiere el Consentimiento para la Adopción de los Menores

El artículo 21 de la Convención de Los Derechos del Niño prevé que las personas que den su consentimiento para la adopción deben prestarlo con conocimiento de causa y sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario.

En ese sentido, el artículo 305 C del Código de la Familia dispone que:

Artículo 305-C:

“Los padres biológicos serán informados y asesorados acerca de los efectos de la adopción, previo al otorgamiento de su consentimiento, para la asignación temporal. Este consentimiento debe otorgarse libremente, sin presiones ni contrapartida material o de otra índole”.

Cuando los padres biológicos deciden dar sus hijos en adopción, deben expresar su voluntad en el proceso de declaratoria de adoptabilidad del menor, en el que además se procede a la declaratoria de inhabilitación de sus padres, en el ejercicio de la patria potestad.

En la etapa del proceso de adopción, se requiere esencialmente del asesoramiento de los padres biológicos, al igual que el de los futuros adoptantes, y un aspecto importante de este asesoramiento consiste en que todos deben contar con el conocimiento de que el vínculo que se crea entre adoptante y adoptado es definitivo, indivisible, irrenunciable, e irrevocable. Son los efectos que la Doctrina le reconoce a la adopción plena.

A la Dirección Nacional de Adopción del Ministerio de Desarrollo Social le corresponde recibir las peticiones de adopción, teniendo entre sus funciones brindar asesoramiento a los adoptantes, a los adoptados, en general, a todas las personas que otorgan su consentimiento para la adopción sobre sus consecuencias y requerimientos legales.

2.19.1.3. El Consentimiento para Adoptar que se Otorga Mediante Acto Administrativo y Declaración Notarial

Cuando el consentimiento se expresa en un acto administrativo y/o mediante declaración jurada notarial, se realiza al margen de la ley.

Es oportuno advertir que los derechos y deberes que tienen los padres sobre sus hijos, los cuales derivan de la patria potestad, son personalizados, indelegables e inalienables. Los padres no pueden disponer, modificar o renunciar a la titularidad de tales derechos, los actos jurídicos que se relacionan con ellos, producen relaciones familiares. Los elementos de estos actos escapan de la regulación de los progenitores.

Por ello, la norma establece de manera especial el procedimiento que debe agotar para externar su consentimiento. La declaración jurada ante una autoridad administrativa y/o mediante acto notarial donde se consigna la autorización de la adopción y simultáneamente donde se deja sentada la entrega del menor o de la menor, se aparta a lo que establece la norma y deja al Juzgador solamente en posibilidad de ratificar el acto.

Sobre el particular, Stilerman y Sepiarky observan que *“esa modalidad de entrega de menores fue vista con disfavor por parte de la doctrina y jurisprudencia, ya que se le considerada una pantalla de legalidad, tanto de las adopciones internacionales como de aquellas en las que no se cuidaba suficiente el interés del menor”*.

En este contexto, la guarda de hecho surge como un dato de la realidad que no puede soslayarse y que exige ser analizada a la luz de la legitimidad del acto que le dio origen si, pese a la prohibición, se instrumenta la entrega de un menor por acto no judicial. Dicho instrumento solo podrá ser considerado una prueba de la voluntad de entregar al hijo en adopción por parte de los progenitores biológicos, la guarda debe ser peticionada al juez, quien resolverá lo que resulte más conveniente para el menor.

Autores, como Abel Fleitas Ortiz de Rosas y Eduardo G. Roveda plantean que las guardas deben ser concedidas por el Juez. Señalan que las normas constituyen la garantía de esa intervención judicial. En este aspecto, cabe destacar que los artículos 305 a 305 F del Código

de Familia tratan sobre la asignación temporal, período de convivencia del que dispone el juez para que él o la menor convivan temporalmente con los posibles adoptantes (1 a 3 meses). Dicho período lo supervisa y evalúa el Tribunal con la asistencia del Equipo Interdisciplinario.

2.19.1.4. El Momento en que se Otorga el Consentimiento para la Adopción

El Artículo 306 del Código de Familia dispone: Cuando media el consentimiento de los padres para la adopción, éstos deberán expresar su voluntad en el proceso de declaratoria de adoptabilidad.

Cabe destacar que, mientras los Tribunales sean las autoridades competentes para decidir si se accede a la solicitud de adopción, éstos tendrán la oportunidad de conocer de cerca los pormenores del trámite de la misma y constituirán el mejor control para garantizar que se lleven a cabo en debida forma. La sentencia que declara la inhabilitación y adoptabilidad debe dictarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la audiencia y se remite copia autenticada de ella a la Dirección Nacional de Adopciones.

Es importante que el impulso o demora que puede tener esta clase de procesos, depende de muchos factores, entre ellos: que existan suficientes defensores que puedan actuar en las diligencias; que la documentación que se le presenta al juez esté completa y reúna todos los requisitos exigidos por la ley, además, que las notificaciones de las partes se realicen en forma expedita.

2.19.2. La Autorización Judicial

La autorización judicial se puede ligar al concepto de competencia, ya que sólo pueden conocer de adopción los tribunales señalados por la ley. La autorización judicial varía dependiendo del adoptado:

- Si es un mayor de edad tienen privativa los juzgados de Circuito y en aquellos lugares donde no exista Juzgado de Circuito tendrán consecuencias los Juzgados Seccionales de Familia.
- Si son menores de edad, conocen privativamente el juzgado de Niñez y Adolescencia.

2.19.3. La Inscripción en el Registro Civil

Esta inscripción va a constituir el último requisito de forma exigido y, a la vez, concluye con el proceso de adopción; ya que sin la misma no se puede llevar a cabo ninguna acción.

2.19.4. Documentación Requerida para Adoptar:

Las personas interesadas en adoptar deberán aportar la siguiente documentación:

1. Certificado de Nacimiento de la persona o personas interesadas en adoptar.
2. Certificado de matrimonio o prueba de la unión de hecho, si fuera el caso.

3. Certificación de trabajo u otro documento que permita establecer la capacidad de satisfacer las necesidades materiales del niño, niña o adolescente.
4. Certificados médicos de buena salud física y mental, expedidos por una institución del Estado.
5. Dos fotografías recientes tamaño carnet a colores.
6. Fotografías en colores, tamaño postal, de la fachada, del interior y de la parte posterior de la residencia de la persona o personas solicitante (s).
7. Las demás establecidas por la ley o el reglamento. La Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones podrá solicitar la actualización o renovación de la documentación.

2.19.5. Documentación Obtenida en la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones

Las personas interesadas en adoptar, que residan en el territorio nacional, deberán obtener en la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones, la siguiente documentación:

1. Estudio psicológico de las personas solicitantes, que incluya entrevista clínica y pruebas psicológicas.

2. Evaluación social de las personas solicitantes.
3. Informe de entrevista a los hijos e hijas de las personas adoptantes, en caso de que existan, que refleje la opinión del niño, niña o adolescente, respecto a la adopción.
4. Certificado de participación en la escuela para padres y madres adoptivos, impartida por la Dirección nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones o por agentes autorizados por ésta; así como los certificados expedidos por las autoridades centrales en materia de adopción de otros Estados, reconocidas por la República de Panamá.
5. Certificado de antecedentes penales.

Las evaluaciones y los informes serán válidos por un año, luego del cual la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones podrá exigir su renovación total o parcial.

2.20. Etapa Preadoptiva de Evaluación

La Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud, procederá a su admisión, emitiendo una providencia, correspondiente. Con esto se da inicio la etapa preadoptiva de evaluación.

En esta etapa, el Equipo Técnico de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones realizará visitas domiciliarias y entrevistas a los solicitantes y a cualquier otra persona que consideren pertinente visitar; luego se aplicarán pruebas psicológicas, así como otras investigaciones sicosociales para la determinación de la aptitud con que cuentan estas personas solicitantes para adoptar.

La etapa preadoptiva de evaluación tiene un término máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la solicitud.

Durante este período, las personas solicitantes de adopción deberán asistir a la escuela para padres y madres adoptivas, impartidas por La Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y adopciones o por agentes autorizados por ésta.

2.20.1. Evaluación en la Adopción del Hijo o Hija de Crianza o del Cónyuge o Conviviente en Unión de Hecho

Para la adopción del hijo o hija de crianza o del cónyuge o conviviente en unión de hecho, la etapa preadoptiva de evaluación tendrá una duración máxima de dos (2) meses, y se exceptúa de la etapa de acogimiento preadoptivo; sin embargo, se mantiene el deber de participar en la escuela para padres y madres adoptivos.

2.20.2. Declaración de Idoneidad para Adoptar

Al término de las evaluaciones sicosociales y la elaboración de los informes técnicos respectivos, en los cuales se detallan las actuaciones, investigaciones y evaluaciones realizadas a las personas solicitantes, la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones, dentro de los cinco (5) días siguientes, procederá a dictar una resolución motivada en la que declara si las personas solicitantes son idóneas para adoptar, del mismo modo, una valoración técnica de la pareja o la persona evaluada, en cuanto a su capacidad para adoptar, y la determinación del rango de edad del menor que va a adoptarse, para el cual son idóneos.

Esta resolución podrá ser impugnada y admite el recurso de reconsideración que deberá ser sustentado dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación.

2.21. Etapa Preadoptiva de Asignación

La Ley de adopciones creó el Comité de Asignación Familiar, que estará integrado por: el equipo técnico en materia de adopciones de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y adopciones, dos representantes de organizaciones no gubernamentales de atención y protección a la niñez y adolescencia.

Dicho Comité, denominado Comité de Asignación Familiar en materia de Adopciones, se reunirá cada quince días, sin perjuicio de celebrar reuniones semanales cuando lo estime conveniente.

Además tendrá como secretaria a la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones, que tendrá las siguientes funciones:

1. Organizar y Coordinar las reuniones del Comité
2. Presentar las posibles alternativas familiares idóneas para los menores en estado de adoptabilidad.
3. Levantar el acta de reunión , en la que conste la fecha, el lugar de reunión, la existencia del quórum debido, los nombres de las personas participantes, los números de expedientes analizados, las argumentaciones a favor o en contra de cada preasignación realizada o rechazada, así como del resultado de las votaciones, en caso de que haga lugar a ellas.

El acta de reunión debe reposar en la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones, contará con la firma de todas las personas que participaron en la reunión.

2.21.1. Asignaciones

La asignación viene a ser la decisión que adopta el comité de asignación Familiar en materia de adopciones y que se expresa mediante acto administrativo. Esta decisión se le asigna a una familia, un menor en estado de adoptabilidad.

Las decisiones adoptadas por el comité se harán por consenso, y sólo, en los casos en que no lo hubiera, se procederá a realizar una votación, en la que se decidirá por mayoría simple.

La asignación se notificará a las personas adoptantes o a su apoderado judicial, quienes tienen el derecho de aceptarla o rechazarla.

Las personas solicitantes, que residan en el territorio nacional, deberán expresar su aceptación o rechazo a la asignación, por escrito en forma directa o por intermedio de apoderado legal, dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

En el caso de solicitantes que residan en el exterior, las notificaciones se harán de acuerdo con los parámetros contenidos en el Convenio Relativo a la Protección del menor y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.

El comité revocará la asignación en los siguientes casos:

- Cuando las personas adolescentes no consientan la asignación y cuando los niños y niñas emitan opinión contraria a su adopción.
- Cuando las personas adoptantes desistan de adoptar al niño, niña o adolescente, o cuando no se pronuncien dentro del plazo establecido.

2.21.1.1. La Asignación Temporal

Al Juez competente le corresponde la facultad de disponer la convivencia temporal del niño o niña con los futuros adoptantes, por el término de uno (1) a tres (3) meses.

El objetivo de dicho período permite evaluar el impacto de la incorporación del menor o de la menor en la dinámica familiar y sus efectos; así como la convivencia de la constitución del vínculo familiar.

De allí que debe ser supervisado y evaluado por el equipo interdisciplinario del Juzgado, donde el Juez está facultado para revocar si lo considera, la asignación temporal en interés superior del menor.

Como se anotó, anteriormente cuando se otorga el consentimiento mediante declaraciones notariales, previo a la declaratoria de inhabilitación, se crea una guarda de hecho que da lugar a la situación de la dispensa, dejando fuera del alcance de los jueces la facultad de disponer la asignación temporal.

2.21.1.2. De la Declaratoria Judicial de Adopción

Concluida y aprobada la etapa de Asignación Temporal, el Juez o Jueza deberá señalar la fecha de audiencia a la que deben concurrir los solicitantes de la adopción, el Ministerio

Público y el Defensor del Menor. En esta diligencia, éstos últimos emitirán su concepto; luego corresponderá al Juez emitir la resolución que niega o concede la adopción, la que se dictará dentro de los diez (10) hábiles, posteriores a la audiencia.

2.21.2. La Opinión del Menor en las Adopciones Consentidas

La edad viene a ser un factor que influye en la evaluación del grado de madurez de los menores, ya que les concede el derecho de expresar sus opiniones sobre la adopción. A través de la aplicación de diversas técnicas, por parte del equipo Interdisciplinario del Tribunal, se conocerá el pensamiento y situaciones con que cuenta el menor; siendo estos conocimientos herramientas que orientarán al Juez sobre la condición psicológica que presente el menor.

Sobre el particular el Artículo 761 del Código de Familia establece:

“En los asuntos referentes a menores o discapacitados, es obligatorio la intervención del equipo interdisciplinario. El Tribunal debe cumplir este requisito antes de decidir la causa”.

En los lugares donde no fuese posible contar con este equipo, los menores podrán ser evaluados por las instituciones o profesionales del lugar.

Para definir la capacidad de decidir que tiene un niño se debe considerar la edad con que cuenta y el contexto en el que se desarrollan, a efecto de que los jueces tomen sus decisiones.

El derecho que tienen los menores de opinar o de ser escuchados en el proceso de adopción se halla íntimamente vinculado con el derecho a su identidad y a conocer sus orígenes.

El profesor Françoise Dolto en su obra “Los niños y su derecho a la Verdad” resalta la importancia que juega la verdad, esa verdad que los adultos comunican a los niños, quienes no solamente la desean en forma inconsciente, sino que la necesitan, teniendo derecho a conocerla. La verdad puede ser dolorosa a menudo; decirla permite al individuo reconstruirse y humanizarse.

2.22. Etapa Preadoptiva de Acogimiento

Con la evaluación favorable de la interrelación, la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones procederá a dictar una resolución motivada, en la cual se otorga el acogimiento preadoptivo, la que podrá tener una duración de uno a tres meses, según lo determine el criterio técnico.

El acogimiento preadoptivo será supervisado y evaluado por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones. Para tal fin, se realizarán las visitas domiciliarias y se aplicarán las evaluaciones necesarias, para comprobar la adaptación del niño, niña, o adolescente. No obstante, esta etapa genera obligaciones para los solicitantes,

quienes tendrán el deber de cuidar, proteger y atender integralmente las necesidades dentro del seno familiar.

2.22.1. Etapa de Constitución de la Adopción

2.22.1.1. Finalidad:

La declaratoria judicial de adopción tiene como propósito crear el estado de filiación, sustituyéndolo por la adopción. Contando con la comparecencia personal de los interesados y la intervención del Ministerio Público y del Defensor del Menor, y solo procederá cuando concurren las condiciones exigidas por la ley, además de la existencia de motivos justificados que les ofrezcan ventajas y condiciones futuras a los menores y adolescentes sujetos a la adopción.

2.22.1.2. Declaración Judicial de Adopción

Una vez concluidas las etapas preadoptivas, la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones remitirá al Juzgado de niñez y Adolescencia competente formal solicitud de constitución de la adopción; para ello existe un período de cinco (5) días posteriores al término del acogimiento preadoptivo. A esta solicitud se le adjuntará el expediente de las personas adoptantes del menor y la copia autenticada del acta del comité de Asignación Familiar en materia de adopciones y de la asignación; la aceptación de las personas solicitantes; la manifestación de conformidad con la asignación por parte de la autoridad Central de

recepción, si se trata de adopción internacional, y los demás requisitos establecidos en la presente ley, a fin de que sea declarada judicialmente la adopción.

2.22.1.3. Procedimiento Judicial

Recibida la documentación contentiva de la solicitud de adopción y la documentación que se acredite el período de acogimiento y su evaluación favorable por la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones, el Juez competente dictará auto de admisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del ingreso de la solicitud, fijando la fecha de la audiencia, que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes, contados a partir de la fecha del auto de admisión de la solicitud.

2.22.1.4. Audiencia de Adopción

Se celebrará con los presentes, sin necesidad de nuevo señalamiento cuando se dé la ausencia del Ministerio Público y del Defensor del Menor sin causa justificada. Solo podrá suspenderse por una sola vez si existen circunstancias debidamente motivadas en el expediente.

En la audiencia de adopción, las partes y los sujetos procesales debatirán sobre las evaluaciones realizadas durante la etapa de acogimiento preadoptivo y la conveniencia de declarar o no, judicialmente la adopción.

El representante del Ministerio Público y el Defensor del menor tienen la obligación de emitir concepto en el acto de audiencia oral; para ello contarán con un período de tiempo que no podrá exceder de veinte minutos.

El juez deberá pronunciarse sobre la solicitud de adopción en el mismo acto de audiencia y el fallo se notificará en el mismo acto.

2.22.1.5. Sanción

En estos procesos, el Juez podrá imponer sanciones pecuniarias, que oscilan entre cien balboas (B/. 100.00) a quinientos balboas (B/. 500.00), cuando las partes y sujetos no asistan a la audiencia sin que medie justa causa debidamente acreditada.

2.22.1.6. Valor Probatorio

Las investigaciones y los informes periciales que sean elaborados o avalados por la Dirección Nacional de la Niñez, la Adolescencia y Adopciones tendrán pleno poder probatorio: es decir, que sirven de plena prueba.

2.22.1.7. Apelación

Cuando una de las partes se considere agraviada por decisión que surge de la sentencia que conceda o rechace la adopción, tendrá derecho a impugnarla, interponiendo el recurso de apelación en el acto de notificación o dentro de los tres días siguientes a la notificación.

El Recurso de Apelación contra la sentencia de adopción tiene efecto suspensivo.

Una vez anunciado el Recurso de Apelación y sin necesidad de que se expida providencia que admita la apelación y se conceda el recurso; contará el apelante con un término de tres (3) días para sustentarlo. Igual término se le concederá al resto de los interesados para que se opongan, incluyendo al representante del Ministerio Público. La sustentación se realizará ante el tribunal de la causa, quien lo remitirá al superior.

2.22.1.8. Trámite de Segunda Instancia:

Una vez ingresado el expediente al Tribunal de Alzada, el Magistrado Ponente deberá elaborar el proyecto de sentencia dentro de los quince días siguientes a la adjudicación de éste, y el resto de los magistrados tendrán el término de cinco días para hacer sus observaciones.

En ningún caso, el proceso de segunda instancia deberá exceder el término de cuarenta y cinco días, contados desde el ingreso del negocio al Tribunal *ad quem*.

2.22.1.9. Inscripción de La Adopción

Una vez concedida o ratificada la adopción, el Juez tendrá un término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para remitir a la Dirección Nacional de Registro Civil copia autenticada de la sentencia, para su debida inscripción.

El Registro Civil procederá a inscribirla dentro de los siguientes cinco (5) días de su recepción y remitirá copia de la marginal de inscripción al juzgado para que repose en el expediente.

2.23. Etapa Postadoptiva

Una vez se haya constituido la adopción por resolución judicial, se inicia la etapa postadoptiva, la que consiste en dar un seguimiento periódico al hogar adoptivo por un período de tres (3) años a la nueva relación familiar.

Corresponderá a la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones la responsabilidad de realizar el seguimiento periódico cada seis meses por el término de tres años al hogar adoptivo.

2.24. Adopción Internacional

La Adopción Internacional es un fenómeno relativamente nuevo que se da cuando el domicilio o la nacionalidad de los adoptantes no coinciden con la de aquellos adoptados.

Actualmente, países desarrollados y altamente industrializados y de baja natalidad, se interesan por incorporar niños en adopción provenientes de países en vías de desarrollo y de alta natalidad, donde el problema de la infancia abandonada adquiere dimensiones importantes. A menudo, en estos países, los mecanismos de integración a un hogar sustituto se encuentran poco desarrollados, la adopción internacional puede presentarse como una solución.

En este sentido, nuestro Código de la Familia y del Menor; en su Artículo 315 A dispone lo siguiente:

Artículo 315:

“La adopción internacional procederá cuando el adoptivo o la adoptiva no puede ser colocado en un hogar de guarda, entregando o atendiendo de manera adecuada por adoptante o adoptantes dentro del territorio de la República de Panamá, será posible su realización con los países que hayan ratificado el Convenio de la Haya, relativo a la protección del niño y la cooperación en Materia de Adopción Internacional, o que hayan celebrado convenios bilaterales o multilaterales de protección al niño, niña o adolescente en adopción”.

El Estado y a la sociedad tienen la obligación de velar por los derechos de los menores de edad, para que éstos crezcan en ambientes propicios para su crianza y su desarrollo integral; algo inmerso en la teoría de los derechos humanos.

Por esto, la comunidad internacional debe ser la última en ser llamada a solucionar este tipo de problemas, más aún, cuando estas obligaciones no sean cumplidas.

2.24.1. Presupuestos para la Adopción Internacional

La Adopción Internacional está sujeta a los siguientes presupuestos:

1. Que el país de recepción sea suscriptor del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional o que exista un tratado o convenio internacional sobre adopción entre la República de Panamá y el país de recepción, conforme las garantías y términos establecidos en el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.
2. Que la Autoridad Central del país de recepción o la autoridad competente en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia garantice la idoneidad de los procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados gocen de todas las garantías y derechos que el país de origen reconoce a sus nacionales.

3. Que en el país de recepción existan, en favor de las personas adoptadas, derechos, garantías y condiciones mínimas, iguales a los consagrados por la legislación panameña, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño.

2.24. 2. Protección Internacional de los Niños

El convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 desarrolla la protección del niño y el procedimiento relativo a la cooperación en materia de adopción internacional estableciendo salvaguardas, para asegurar que la adopción internacional tenga lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales.

El Convenio de La Haya de 1993 reconoce que la adopción internacional puede presentar ventajas, entre ellas: la de dar una familia permanente a un niño que carece de ella y que no puede encontrar en su Estado de origen. En aplicación de esta disposición se hace necesario que sean examinadas primeramente las posibilidades de colocación del niño en su Estado de origen, para proceder con un Estado extranjero.

El Convenio de La Haya de 1993 insta un sistema de cooperación entre las autoridades de los países de origen y de recepción, creado para asegurar que la adopción internacional tenga lugar en condiciones que ayuden a garantizar las mejores prácticas para la adopción y la eliminación de abusos. Las salvaguardas establecidas por el convenio tienen el objetivo de prevenir la sustracción, la venta, el tráfico de niños y cualquier otro delito.

El convenio garantiza el reconocimiento en todos los Estados contratantes de las adopciones hechas de conformidad con el mismo.

El Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 plasma la competencia, la Ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución, la cooperación materia de responsabilidad parental y las medidas de protección con que cuentan los niños, construida bajo una estructura para la cooperación internacional efectiva en cuestiones relativas a la protección de los niños, proporciona una oportunidad única para la construcción de puentes entre sistemas legales con diferencias culturales o religiosas.

El Convenio de La Haya de 1996 amplía sobre cuestiones relativas a la protección internacional de los niños; de las controversias entre los padres, relativas a la custodia y al derecho de visita, a la protección de adolescentes fugitivos; de la competencia en relación con el niño refugiado o internacionalmente desplazado; a la colocación del niño en el extranjero en una casa de acogida o institución para su cuidado; de la ley aplicable a la determinación de la responsabilidad parental respecto al niño y al reconocimiento de facultades específicas de representación.

Las disposiciones uniformes establecidas en el Convenio de La Haya de 1996:

- Permiten que cualquier país, donde se encuentre presente el niño tome las medidas de emergencia o provisionales que resulten necesarias;
- Determinan cuáles son las leyes nacionales aplicables y cuáles las autoridades competentes para tomar las medidas necesarias de protección;
- Otorgan la responsabilidad primaria a las autoridades del país donde el niño tiene su residencia habitual;
- Evitan la posibilidad de decisiones contradictorias y establecen el reconocimiento y ejecución de las medidas tomadas en un Estado contratante y en todos los demás Estados contratantes.

2.24.3. Declaraciones Internacionales sobre los Derechos del Niño

Desde tiempos remotos, cuando no se precisa la fecha, se han venido haciendo declaraciones a favor de los niños; declaraciones nacionales e internacionales. Veamos tres fundamentales.

2.24.3.1. Declaración de Ginebra

La primera declaración sistemática surgió mediante pronunciamiento de la pedagoga Suiza Englontine Jebb, y el 28 de septiembre de 1924, la Asamblea de las Naciones la denominó

“Declaración de Ginebra”, la cual fue una propuesta de esperanza frente al Holocausto que significó la Primera Guerra Mundial, era una esperanza de paz.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939, las declaraciones se convirtieron en un simple papel sin valor. La Declaración de Ginebra consta de cinco puntos. Ellos son los siguientes:

- El niño debe ser colocado en condiciones que pueda desarrollarse de una manera normal, física y espiritualmente.**
- El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser asistido, el retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser conducido, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y socorridos.**
- El niño debe recibir el apoyo en época de calamidad.**
- El niño debe ser dotado de medios para ganarse la vida; debe ser protegido contra la explotación.**
- El niño debe ser educado, y sus mejores cualidades deben ser puestas al servicio de sus hermanos.**

2.24.3.2. Declaraciones de los Derechos Humanos

El 1 de diciembre de 1948 fue proclamada por Las Naciones Unidas, denominándolas Declaración de los Derechos del Hombre, siendo cambiado el título del 5 de febrero de 1952, la Declaración de Los Derechos Humanos. Consta de un preámbulo y 30 artículos.

2.24.3.3. Declaración de Los Derechos del Niño

Fue aprobada por la Asamblea de Las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Su texto es el siguiente y contiene 10 principios:

Principio I: El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, nacionalidad o posición social, posición económica, nacimiento de otros motivos de él o de su familia.

Principio II: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicio , dispensando todo ello por la ley y otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, en forma saludable y normal, en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar la ley con este fin, la consideración fundamental será el interés superior del niño.

Principio III: El niño tiene el derecho desde su nacimiento a su nombre y a una nacionalidad.

Principio IV: El niño debe gozar de beneficios de la seguridad social; tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, la madre y él recibirán cuidados especiales, incluso prenatal y postnatal.

Principio V: El niño, física o mentalmente impedido o que sufre algún impedimento social, debe recibir tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere.

Principio VI: El niño, para el pleno, armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión.

Principio VII: El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, por lo menos en etapas elementales. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes la responsabilidad de su educación y orientación, dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones para lograr el fin perseguido.

Principio VIII: El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

Principio IX: El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No se le permitirá al niño trabajar antes de una edad adecuada.

Principio X: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puede fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole; debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal; así como con aptitudes al servicio de sus semejantes.

2.24.3.4. La Convención Internacional sobre Los Derechos Del Niño

El 20 de noviembre de 1989, en su cuadragésima cuarta asamblea de Las Naciones Unidas, se aprobó La Convención sobre los Derechos del Niño.

La protección social se logra a través de un conjunto de actividades dirigidas a propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo de la personalidad, con el propósito de satisfacer las necesidades básicas y garantizar derechos fundamentales de la niñez y juventud. La protección jurídica implica legislar exigibles los derechos consagrados en La Convención,

mediante la creación de instancias administrativas y judiciales que intervengan en caso de que estos derechos sean amenazados o violados.

En el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño está considerada la adopción.

Los Estados que reconocen y/o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y tendrán a bien:

- a) Velar porque la Adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes,
- b) Reconocerán que la Adopción, por personas que viven en otros países, pueda ser considerada como otro medio de cuidar del niño en el caso de que este no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen.
- c) Velarán porque el niño, objeto de adopción en otro país, goce de salvaguardas y normas equivalentes a las existentes, respecto de la adopción por personas que residan en el país.
- d) Velarán las medidas apropiadas para garantizar que nieguen el caso de adopción por personas que residan en otro país. La colocación no da lugar a beneficios financieros para quienes participan en ella.

2.25. Entidades Colaboradoras en Materia de Adopción Internacional

Podrán ser intermediarios en los trámites de adopciones internacionales, dentro del territorio nacional, los organismos acreditados como colaboradores en materia de adopción internacional que estén debidamente acreditados y registrados por la Autoridad Central, en materia de adopciones del país de recepción y de origen.

La entidad colaboradora de adopción que solicite la acreditación en Panamá deberá probar que está autorizada para operar en el Estado panameño por parte de la Autoridad Central del Estado de recepción.

2.25.1. Autoridades Centrales

2.25.1.1. Cooperación Interestatal a través de las Autoridades Centrales

Una red internacional en expansión de aproximadamente 300 autoridades centrales en más de 90 países que trabaja para mejorar la protección de los niños.

Una de las autoridades que distinguen a los tres convenios de La Haya sobre los niños, es la función que atribuyen a las Autoridades Centrales en cada Estado contratante; con el objetivo de alcanzar la cooperación administrativa en materia de protección de los niños.

En el caso de los tres convenios de La Haya, sobre los niños; las autoridades centrales tienen funciones generales de cooperación, en relación con la protección internacional de los mismos. Las siguientes, son algunas de las funciones otorgadas a las Autoridades Centrales dentro de los convenios específicos:

- Participación en la localización de niños extraviados;
- Intercambio de información, acerca de niños en riesgo;
- Promoción de soluciones concordadas cuando ellas sean apropiadas;
- Intercambio de información con las demás Autoridades Centrales sobre las leyes de protección del niño y servicios relativos a éste, en funcionamiento, en sus países;
- Provisión de asistencia o asesoría a los extranjeros que traten de obtener o ejecutar órdenes para la protección del niño;
- Remoción de los obstáculos al adecuado funcionamiento de los diferentes convenios.

Las Autoridades centrales, establecidas en aplicación de los convenios de La Haya, constituyen el núcleo central de la red global de cooperación interestatal, creada para la

protección de los niños. Entre las ventajas que comportan para los Estados formar parte de esta red internacional, se encuentra la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias y técnicas sobre la protección de los niños.

2.26. Solicitud de Adopción Internacional

Cuando las personas solicitantes estén domiciliadas en el extranjero, deberán presentar su solicitud de adopción mediante la Autoridad Central o de los organismos acreditados, como colaboradores en Materia de Adopción Internacional del país de recepción. Recibida la solicitud por la Autoridad Central Panameña, las personas solicitantes designarán un apoderado judicial idóneo para ejercer la abogacía en la República de Panamá.

2.26.1. Documentación para Solicitantes con Residencia en el Extranjero

En caso de que el solicitante o los solicitantes residan en el extranjero, deberán aportar la siguiente documentación:

1. Estudio psicológico de las personas solicitantes, que incluya entrevista clínica y pruebas psicológicas realizadas o avaladas por la Autoridad Central del país de recepción.
2. Evaluación social de las personas solicitantes, realizada por La Autoridad Central del país de recepción.
3. Historial policivo, expedido por la autoridad correspondiente.

4. Copia autenticada del pasaporte, debidamente apostillada o autenticada por el
Cónsul de Panamá en dicho país.
5. Copia autenticada de la autorización para ingresar al adoptado al país de recepción.
6. Autorización para adoptar expedida por la Autoridad Central competente en
materia de adopciones en el país de recepción.
7. Compromiso de seguimiento de la adopción, por parte de la Autoridad Central del
país de recepción, por un término de tres años.
8. Informe de entrevista a los hijos e hijas mayores de siete (7) años de las personas
adoptantes, en caso de que existan, que refleje la opinión del niño, niña o
adolescente respecto a la adopción, realizada por la Autoridad Central del país de
recepción.
9. Certificado de participación en la escuela para padres y madres adoptivos,
expedido por las autoridades centrales en materia de adopción de otras naciones
reconocidas por la República de Panamá.

2.26.2. Acogimiento Preadoptivo de Adopción Internacional

El acogimiento preadoptivo en las adopciones internacionales, podrá realizarse en la República de Panamá o en el país de residencia de las personas adoptantes, y tendrá una

duración máxima de tres meses, de los cuales el primer mes debe permanecer en el territorio nacional. En los casos en que el acogimiento preadoptivo sea continuado en el extranjero, se remitirá al Juez competente para que este otorgue el permiso de salida, al tenor de lo establecido en la legislación vigente en materia de migración.

2.27. Seguimiento de las Adopciones Internacionales:

El Estado, a través de la Autoridad Central, tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de la residencia y las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes adoptados, de conformidad con las normas de la presente Ley, así como de exigir que se tomen las medidas que sean necesarias, de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes para mejorar dichas condiciones, cuando se comprueben que no son adecuadas para el desarrollo integral del adoptado.

Así mismo, es responsable de requerir semestralmente, por un período de tres años, a las autoridades centrales de otros países y las entidades o los agentes colaboradores extranjeros que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de seguimiento. Dichos informes son obligatorios en virtud de instrumentos internacionales.

Las responsabilidades señaladas cesarán luego de transcurridos tres (3) años desde la fecha de la adopción. En los convenios deberá estipularse que este seguimiento será semestral.

2.28. Características de la Adopción como Nuevo Estado Civil:

2.28.1. Es indisponible o inalienable, pues no se puede transigir con él, ni hacer ningún tipo de negociaciones sobre estatus de hijo adoptivo. Por ser un estado civil, no se puede transigir sobre él y cualquier tipo de transacción carece de validez absoluta.

2.28.2. Es imprescriptible, pues por no ser un derecho patrimonial, sino una situación jurídica en la familia y la sociedad, no se adquiere por el uso, o se pierde por el no uso.

2.28.3. Es irrevocable, pues adquirido un estado civil conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsistirá aunque esa ley pierda después su fuerza.

CAPITULO III

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Está basada en una investigación descriptiva en ciencias jurídicas.

Ileana Gólcher (2000), señala que: “La investigación descriptiva es el instrumento que se utiliza para hallar las variables significativas de un determinado problema o situación” (pág. 80). Escriba y Sustente su Tesis. Metodología para la Investigación Social, Panamá (2000).

Por otra parte, **Roberto Hernández Sampieri (2003)** expresa:

“Los estudios descriptivos miden de manera más independientes los conceptos o variables a las que se refiere”; (pág. 61) Métodos de la Investigación, Investigación, Estadística, México, Editorial Mc Graw Hill, enero 2003.

De lo antes señalado, observamos que el objetivo que persigue una investigación descriptiva es llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes, mediante la descripción exacta de las actividades, siendo su propósito identificar las relaciones entre dos o más variables.

La presente investigación se basa en **“El Proceso de Adopción en Panamá y la Protección del Interés Superior del Menor, bajo el amparo de la Ley 61 de 12 de agosto de 2008”**, la cual versa sobre la adopción de menores de edad, que es principalmente y, por excelencia, una medida de protección, a través de la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Esta

investigación está dirigida a aquellos menores que han sido privados del derecho a convivir con su familia de origen y declaradas judicialmente en estado de adoptabilidad, señalando sus principios, efectos, prohibiciones, condiciones para adoptar, obligaciones, limitaciones, efectos y el procedimiento para la adopción en Panamá.

3.2. Definición Operacional de Variables

Las Variables adquieren valor para la investigación cuando pueden ser relacionadas con otras, ya que para que estas puedan ser medidas, las mismas se pueden variar.

La autora Ileana Gólcher (2003), nos señala que:

“Las variables son las características, atributos, cualidades o propiedades que varían y que se presentan en las unidades de observación. (pág. 50). Escriba y sustente su Tesis. Panamá. Editorial Letras Panameñas, 2003.

3.2.1. Variables Dependientes

César Augusto Bernal (2000) define la variable dependiente como:

“El resultado o efecto producido por la acción de la variable independiente, nivel de productividad (efecto) (pág. 133). Metodología de la Investigación.

La variable dependiente de la hipótesis será la siguiente:

V.D=Y= El Proceso de Adopción en Panamá

3.2.1.1. Definición Conceptual

Es una definición real que tiene la variable y que permite conocer su significado dentro de la investigación, para que de esta manera tanto el lector como el investigador, puedan entenderlo.

La definición para esta variable sería “Se entiende por procedimiento de adopción de personas menores de edad al conjunto de actos tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia.”

3.2.1.2. Definición Instrumental

Busca aclarar cómo se estudiará la variable que se acaba de definir conceptualmente. En nuestra variable independiente se realizará un estudio a la **Ley 61 de 12 de agosto de 2008** y de esta forma, saber cuáles son los procedimientos a seguir en los procesos de adopción de menores de edad.

3.2.1.3. Definición Operacional

En la definición operacional se utiliza la variable para describir los criterios de evaluación y mediación de los resultados que se recojan sobre el procedimiento de los procesos de

adopción del menor de edad y llenar así los vacíos que tengan los abogados litigantes y derivados, también de la jurisprudencia.

Adoptante: Persona mayor de edad que cumple con los requisitos y los procedimientos establecidos en la presente ley para adoptar a una persona hijo o hija de otra, con la finalidad de otorgarle todos los derechos y beneficios que la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley otorgan a los hijos e hijas consanguíneos.

Adoptado: Persona, que siendo hijo o hija por consanguinidad lo es conforme a los términos establecidos por esta Ley.

Adopción: Acto jurídico que se crea entre dos personas, un vínculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas, pero no idénticas, a las que resultan de la paternidad y filiación legítimas o como el negocio jurídico que establece entre adoptante y adoptado una relación jurídica, en cierta medida semejante a la paterno filial.

3.2.2. Variables Independientes

César Augusto Bernal (2000) define la variable independiente como:

“Todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo que se considera como la causa de una relación entre variables” (pág. 132). Metodología de la Investigación.

La variable independiente de nuestra hipótesis es la siguiente:

VI=X= Alternativa eficaz y jurídica para proteger a los menores abandonados.

Esta variable independiente es la que constituyó la causa de la hipótesis de este trabajo de investigación.

3.3. Fuentes y Sujetos de Información

Las fuentes y sujetos de información son de tipo humano, así como materiales, los cuales ayudaron a recopilar toda la información requerida para este trabajo de investigación.

3.3.1. Fuentes materiales.

Se basó en libros, textos jurídicos (Leyes, decretos, códigos), periódicos y documentos que hagan referencia al tema y que nos aportan la adecuada información para concluir con la realización de la investigación.

3.4. Población y Muestra

Sujetos

- ✓ Abogados.
- ✓ Funcionarios del Mides.

- ✓ Mujeres que desean adoptar un menor.
- ✓ Hombres que desean adoptar un menor.
- ✓ Funcionarios del Juzgado de Niñez y Adolescencia.

3.4.1. Población

Esta fuente nos sirve para conocer qué información se maneja a nuestro alrededor, y de acuerdo al resultado, obtendremos las respuestas necesarias que contribuirán a enriquecer el contenido del tema seleccionado.

Esta investigación toma en cuenta a parejas que no han podido concebir y desean adoptar a un menor y de todas aquellas que teniendo descendencia, están anuentes a recibir en sus hogares a menores, con la finalidad de proporcionarles los cuidados y un hogar como miembro de sus familias.

3.4.2. Muestra

Se seleccionó tres (3) albergues que cuentan con menores en estado de abandono, y que son susceptibles de adopción. De allí, se seleccionaron para el estudio a un porcentaje de menores; cinco (5) funcionarios de dichos albergues y cinco (5) abogados.

3.5. Descripción de la Instrumentación

Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado en consideración la aplicación de encuestas y entrevistas. Mediante la elaboración de preguntas cerradas se elaboran los cuestionarios de las encuestas y mediante preguntas abiertas, las entrevistas, ya que con ello pudimos obtener la información requerida. Estos instrumentos fueron aplicados a abogados, funcionarios judiciales y personas encargadas de los albergues.

3.6. Tratamiento de la Información.

La información obtenida fue revisada, analizada y tabulada; aportando datos importantes para proceder a resolver con éxito esta investigación.

3.7. Cronograma de Trabajo

TIEMPO EMPLEADO										
ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
Selección del tema										
Planificación										
Establecimiento de hipótesis y los objetivos										
Revisión bibliográfica										
Definición y desarrollo de la Metodología del trabajo										
Inicio de laboratorio de campo										
Interpretación de la información, discusión de los resultados y conclusiones										
Elaboración del primer capítulo										
Elaboración del segundo capítulo										
Elaboración del tercer capítulo										
Elaboración del cuarto capítulo										
Elaboración de introducción, conclusiones y recomendaciones										
Revisión del manuscrito										
anexos										
Computación del trabajo										
Revisión final y encuadernación										
Presentación a la facultad										
Sustentación										

CAPITULO IV

4. Presentación de Resultados

Los resultados de la investigación se basan en información obtenida, a través de encuestas y entrevistas.

4.1. Análisis de las Encuestas

Las encuestas han sido aplicadas a cinco abogados y a cinco funcionarios públicos, con la finalidad de recabar información para el tema en estudio.

4.1.1. Encuestas a cinco (5) funcionarios de tres albergues y cinco (5) abogados

Pregunta No. 1

Sabe qué es la Adopción?

Resultados:

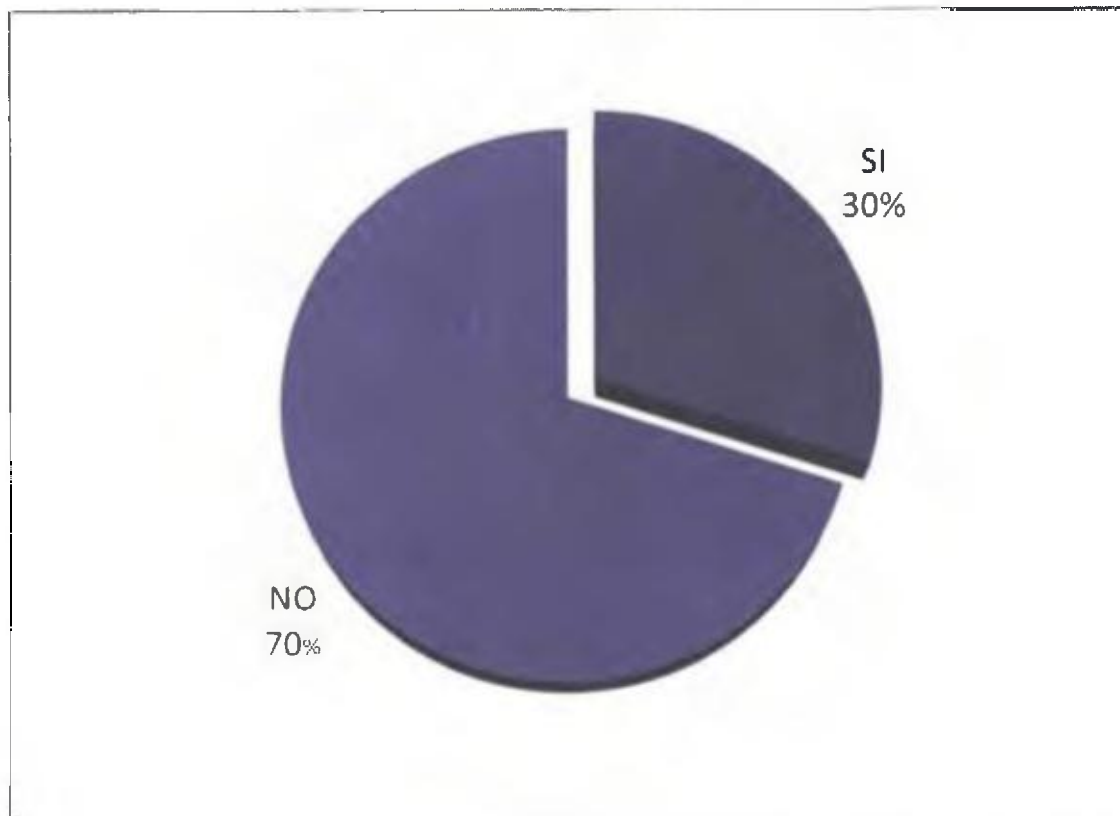
Todos los encuestados manifestaron conocer la Adopción

Pregunta No. 2

Conoce qué ley regula las adopciones en Panamá

Resultados

Los abogados encuestados manifestaron conocer esta ley, sin embargo de las personas que laboran en albergues solo dos (2) la conocen, y tres (3) de ellos no.



Pregunta No. 3

Sabe usted a qué tribunales les corresponde tramitar las adopciones?

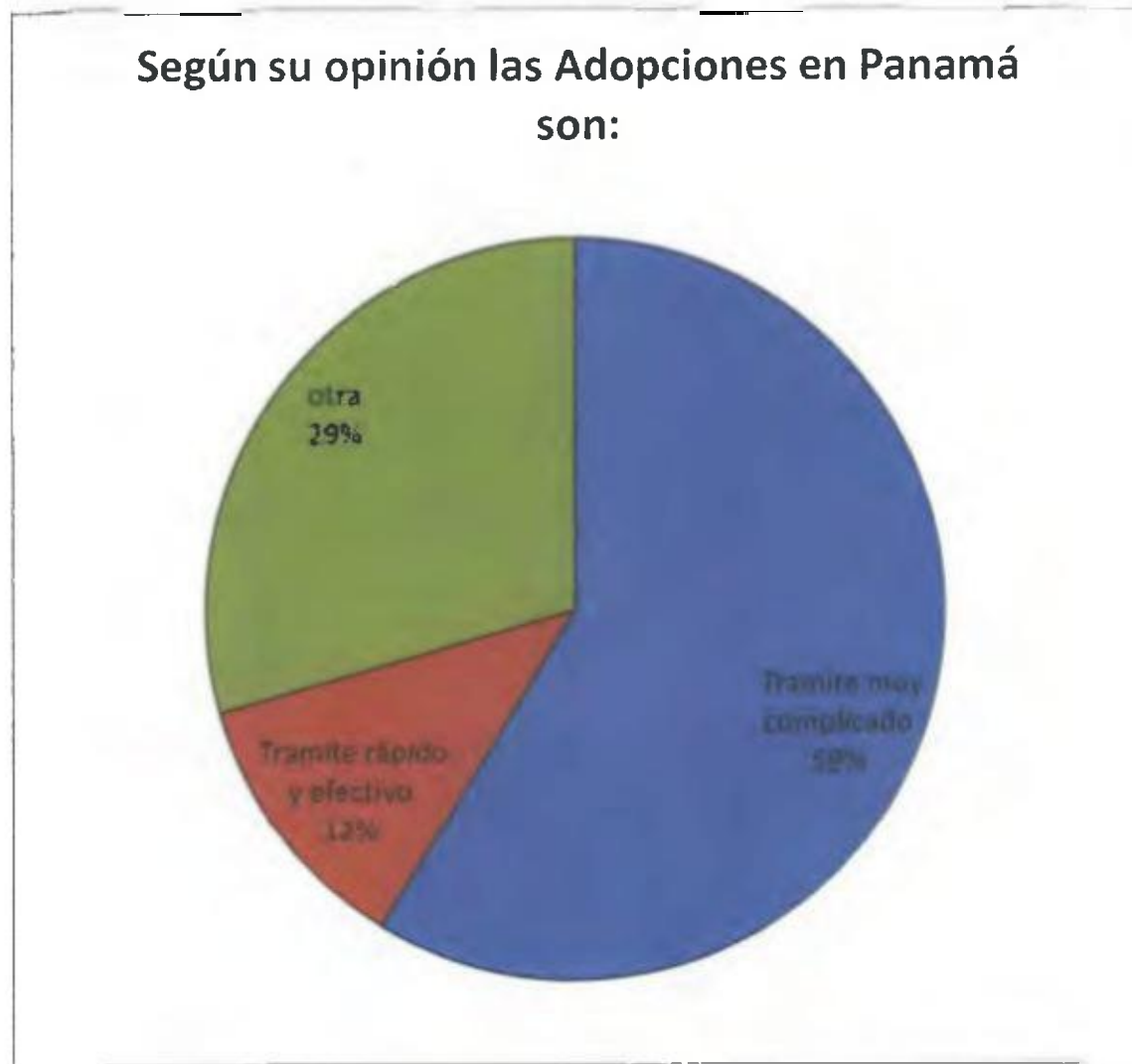
Cinco abogados y dos funcionarios manifestaron conocer el tribunal competente en tema de adopción; sin embargo, tres de ellos no conocen el tribunal correspondiente.



Pregunta No. 4

Según su opinión las adopciones en Panamá son:

- Para la mayoría de los encuestados un trámite muy complicado (59%)

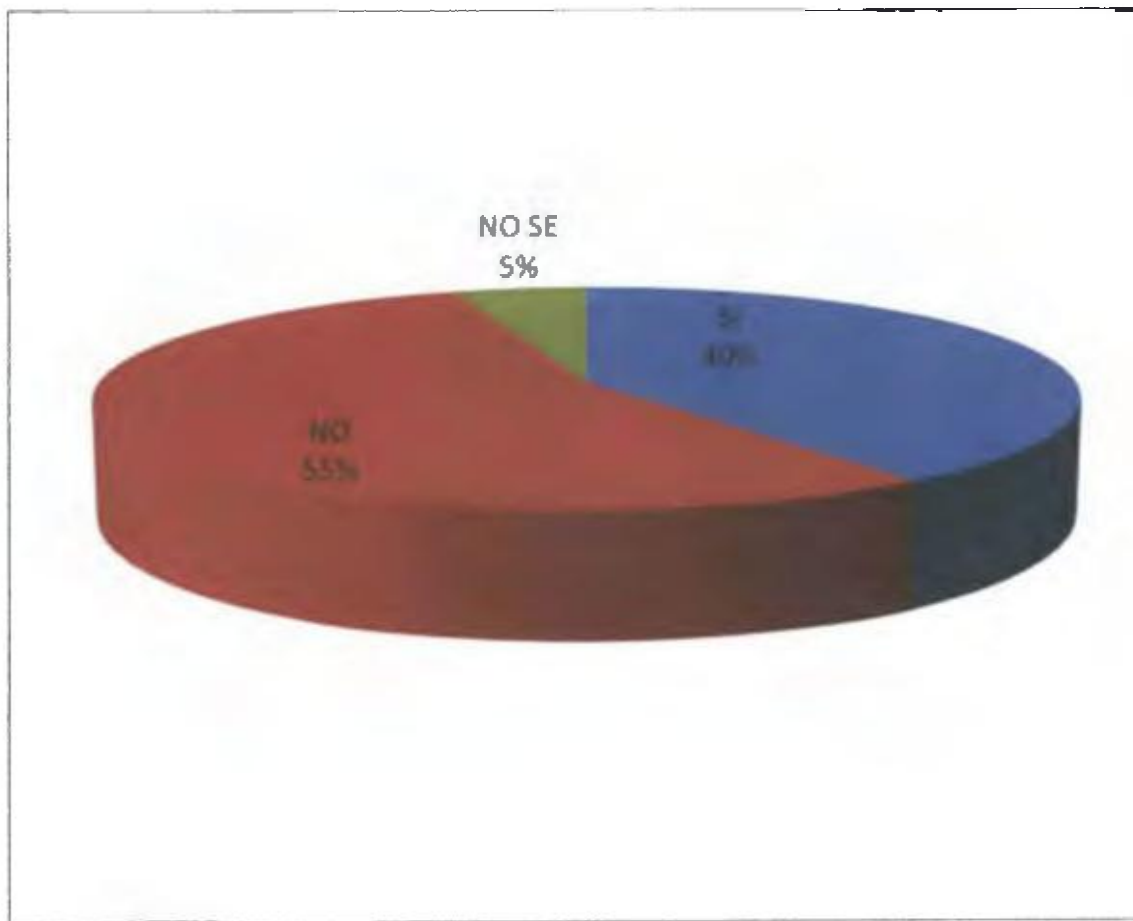


Pregunta No. 5

Piensa que las adopciones contribuyen a proteger los intereses de los menores abandonados?

Respuesta:

El análisis de la encuesta reflejó lo siguiente:



Pregunta No. 6

Conoce el procedimiento que debe agotarse para realizar una adopción?

Respuesta

Todos los encuestados manifestaron no conocer dicho procedimiento

Pregunta No. 7

Conoce alguna persona que haya realizado una adopción?

Respuesta:

A las personas que se logro realizar dicha encuesta, en base a esta pregunta. manifestaron no haber conocido personas que hayan realizado una adopción.

Pregunta No. 8

Sabe de los requisitos que se exigen a los adoptantes?

Respuesta:

Las personas encuestadas manifestaron no conocer tales requisitos

Pregunta No. 9

Recomendaría a alguna persona que conozca a que realice la adopción de un menor?

Respuesta:

Las cinco personas encuestadas manifestaron que sí recomendarían realizar una adopción.

Pregunta No.10

Desea agregar alguna sugerencia o recomendación sobre el tema?

Algunos de los encuestados manifestaron lo siguiente:

- ❖ Al momento de dar en Adopción a un menor, debe tratarse de que los rasgos físicos, por lo menos color de piel, sea lo más similar a los futuros padres, a fin de que no posean traumas innecesarios.
- ❖ Hacer estudios pormenorizados de los futuros padres, a fin de proteger el interés del menor; ya que se han dado casos de maltratos y cuenta órganos, etc.
- ❖ El trámite debe ser más expedito.
- ❖ Se debe promocionar más el proceso de Adopción.

4.2. Análisis de las Entrevistas

4.2.1. Entrevista Realizada a Funcionario del MIDES

Pregunta No.1

¿Existen registros en el MIDES de los menores que hayan sido adoptados y de aquellos en condición de enfermos o con discapacidades especiales?

Respuesta:

Actualmente no existen registros de adopciones de niños en estas condiciones en nuestro país, según el MIDES.

Pregunta No. 2

Cuántas albergues pertenecen al MIDES y a qué menores reciben?

Respuesta:

Existen en Panamá, de acuerdo a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), alrededor de 48 albergues, a los que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) les brinda subsidios: En estas casas Hogares se les brinda atención a niños abandonados, maltratados por sus padres, o que han sufrido abuso sexual, los cuales son clasificados por época escolar, por protección y los que atienden a niños con problemas de desnutrición.

Pregunta No. 3

¿Qué clase de niños prefieren las parejas panameñas, según los registros, a la hora de adoptar?

Respuesta:

Según los registros, las parejas panameñas prefieren a los niños colombianos, principalmente por sus rasgos físicos.

Pregunta No. 4

¿Adoptan los extranjeros, niños panameños?

Respuesta:

Los extranjeros adoptan pocos niños en el país; sin embargo, se han dado muchos casos de adopciones de niños panameños por parte de parejas españolas.

Pregunta No. 5

¿Considera usted que los menores deben permanecer mucho tiempo en instituciones o casa hogares?

Respuesta:

Los niños no deben permanecer mucho tiempo en instituciones, debido a que es mejor que crezcan en un hogar. Por ello, son llevados a hogares sustitutos con probabilidades de adopción. Estos hogares son aquellos que se han inscrito previamente en el banco de datos.

CONCLUSIONES

1. La Adopción , dentro de lo que se enmarca en nuestro Código de la Familia, a mi criterio, constituye una vía en donde el Estado busca brindar una protección integral a menores, los cuales carecen de familia, ya sea por encontrarse en estado de abandono, maltrato o que se encuentran en orfandad.
2. El objetivo primordial de la Adopción es la de asegurar el bienestar del menor cuando sus padres naturales son incapaces de criarlo.
3. La Adopción cumple una función social. Como institución del Derecho de Familia dentro de la relación filial, debe ser acogida en defensa del interés superior del niño y de la niña, rompiendo el carácter discriminatorio que se produce, en ocasiones, entre hijos adoptivos e hijos consanguíneos, persiguiendo como objetivo fundamental el correcto desarrollo del menor dentro de la familia adoptiva.
4. En Panamá, desde aproximadamente 15 años hacia la actualidad, la Adopción viene apreciándose cada vez más como medio adecuado para la formación de la familia, cuando no existe verdadera protección del niño abandonado o en riesgo de abandono.
5. Se pudo observar, que crece la conciencia por parte de muchas madres, particularmente madres solteras o abandonadas que ven la adopción como recurso para cumplir, mediante

otras personas, los deberes que ellas no pueden cumplir debido a su incapacidad económica, psicológica y social.

6. El proceso de Adopción debe realizarse de forma confidencial, con las prohibiciones de que los funcionarios se beneficien del resultado del proceso.

RECOMENDACIONES

1. Que los trámites para realizar el proceso de adopción sea más expedito.
2. Procurar que los menores no permanezcan muchos tiempos institucionalizados o inmersos en orfanatos, ya que es necesario que crezcan y se desarrollen dentro de un hogar.
3. Una vez otorgada la patria potestad a los padres adoptantes, evitar el contacto de los padres biológicos con el menor para que de esta manera se cumpla con el propósito de la Adopción.
4. En todo proceso de adopción se debe tener en cuenta la opinión del menor, ya que el mismo debe basarse en procurar el bienestar del mismo en todo momento.
5. Asegurarle al menor que no volverá a ser víctima de otro abandono, por lo que es esencial mantener la intervención judicial dentro de la familia del adoptado.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Constitución Política de La República de Panamá.

Ley 61 de 12 de agosto de 2008, que dicta la Ley General de Adopciones de la República de Panamá.

Convenio de La Haya, del 15 de junio de 1999.

Ley 105 de 1998, por la que aprueba la Convención Interamericana, sobre conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores, hecha en la Paz Bolivia, el 24 de mayo de 1984. Gaceta Oficial de Panamá, de 21 de enero de 1999. Gaceta No. 23717.

Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación internacional en materia de Adopciones.

CÓDIGO DE LA FAMILIA Y DEL MENOR, Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., Quinta Edición, febrero de 2005, Santa Fe de Bogotá, Colombia.

CORRALES HIDALGO, Manuel de Jesús. Proceso de Familia. Editorial Universitaria. República de Panamá. 2001.

FÁBREGA P, Jorge. Teoría General de la Prueba. Editora Jurídica Iberoamericana, S.A. 2006.

FRANCO SUÁREZ, Roberto. Derecho de Familia. Editorial Temis, S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1992.

FOLLETO. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Mujer haz valer el derecho de tus hijos a ser reconocidos por sus padres.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio Pilar. Metodología de la Investigación. Impretor, S.A. Mexico.2004.

MIZRACHI, Mauricio Luis. Identidad Filiatoria y Pruebas Biológicas. Editorial Astria de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires, Argentina. 2006.

Adopción Internacional y Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993.

CARRILLO CARRILLO, Beatriz L. Editorial Comares, Primera edición. Granada, 2003.

La Aplicación en España del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. GONZÁLEZ BIELFUSS, Cristina. Revista Jurídica de Catalunya Vol. 95 No. 2 de 1996. Págs. 331-346.

Estudio Jurídico sobre La Adopción. Tesis de Grado. Facultad de Jurisprudencia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. ALVARADO, Rafael, Bogotá 1982.

Elementos del Derecho de Familia. GARCIA SARMIENTO, Eduardo. Editorial Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 1999.

Derecho Procesal de Familia. KIELMANOVICH, Jorge L. Editorial Abeledo Perrot, S.A. Edición No. 2. Año 2008.

Régimen de Adopción. Ley 24.779. LEVY, Lea L. Editorial Astrea. Primera Edición, año 1997.

Tratado de Derecho de Familia. MAZZINGHI, Jorge Adolfo. Editorial la Ley, Cuarta Edición, año 2006.

Derecho de Familia. GÓMEZ PIEDRAHITA, Hernán. Editorial Temis. S.A., Santa Fé de Bogotá Colombia. 1992.

Procesos ante los jueces de Familia, Civiles y Promiscuos Municipales. SIERRA RINCÓN, Néstor Antonio. Primera Edición 1992, Librería Doctrina y Ley. Santa Fe, Bogotá, Colombia.

Derecho de Familia. Filiación Régimen de los Incapaces. Segunda Edición. Editorial Temis, S.A., Santa Fe, Bogotá, Colombia.

Las Adopciones Consentidas. Garantía o Violación del Interés Superior del Menor. ARROCHA de, BONILLA, Marisol. Editado por la Dirección de editorial y Publicación de Órgano Judicial de La República de Panamá. Órgano Judicial. Panamá, 2008.

Introducción al Derecho de familia. GÓMEZ PIEDRAHITA, Hernán. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá Colombia, 1992.

Derecho de Familia. HINESTROSA REY, Roberto. Universidad Externado de Colombia, Lecturas, Colombia, 1987.

Derecho de Familia. Derecho Matrimonial. SUÁREZ FRANCO, Roberto. Quinta edición, Editorial Temis, Bogotá Colombia, 1990.

ANEXOS

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO TERCERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ Y EL JUZGADO SECCIONAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN PROPUESTO POR ROBERTO CARLOS SMALL SMIKLE A FAVOR DEL MENOR FRANK EZEQUIEL DAVIS RICHARDS, HIJO DE SU ESPOSA, DELIA MODESTINE RICHARDS BAKER Y EL SEÑOR FRANK DAVIS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Procedente del JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ ha llegado a la Sala Civil el conflicto de competencia suscitado entre el JUZGADO TERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ y el JUZGADO SECCIONAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, dentro del proceso de adopción instaurado por ROBERTO CARLOS SMALL SMIKLE a favor del menor FRANK EZEQUIEL DAVIS RICHARDS.

El presente proceso de adopción fue admitido por el JUZGADO TERCERO DE CIRCUITO DE PANAMÁ el 8 de noviembre de 1993. Seguidamente se realizaron los trámites inherentes a esta clase de proceso.

No obstante, el 14 de enero de 1997, el juzgado de la causa, mediante Auto N° 131 declina la competencia del proceso a favor del JUZGADO SECCIONAL DE FAMILIA DE TURNO. Su resolución es basada en la siguiente apreciación:

" ...

Sin embargo, es el criterio de este Despacho Judicial que siendo la materia que comprende el presente negocio de adopción, regulada en el CÓDIGO DE LA FAMILIA Y EL MENOR, quienes aprehender (sic) el conocimiento del mismo son los TRIBUNALES SECCIONALES DE FAMILIA, quienes se encuentran debidamente constituidos a la fecha, aunado a ello, el mismo cuerpo legal citado nos indica que este Despacho Judicial ya no es competente para conocer del mismo.

Para reforzar lo expuesto, traemos a colación lo dispuesto en el artículo 752 del Código de la Familia y el Menor, que sobre la materia citada dice:

Artículo 752: A los Juzgados Seccionales de Familia les corresponde conocer y decidir:

En primera instancia:

...

4. Adopción de menores, salvo los casos de menores abandonados;

... 10 ..."

Además, manifiesta el Señor Juez que de conformidad con los artículos 836 y 838 del mencionado Código de la Familia, cabe declinar su competencia en el presente caso.

Al ser recibido el expediente por el JUZGADO SECCIONAL DE FAMILIA, elabora una resolución de fecha 24 de abril de 1997, en la cual NO SE AVOCA al conocimiento del presente proceso de adopción y, en consecuencia, se remite al Superior el expediente, para que dirima el conflicto.

Debe la Sala, en primer término, determinar si es competente para conocer del presente conflicto entre el JUZGADO SECCIONAL DE FAMILIA DE PANAMÁ y el JUZGADO TERCERO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. La Corte advierte que los referidos juzgados no tienen un superior jerárquico común, por lo que resulta aplicable el artículo 93 numeral 3 del Código Judicial, donde se establece que la Sala Primera conocerá en una sola instancia de las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre Tribunales que no tengan otro superior común.

Como quiera que competencia es la facultad de administrar justicia en determinadas causas, lo que de *ninguna manera* pueden ejercer dos tribunales distintos a la vez, debe dirimirse el debate de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.

El JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA considera que: "al tiempo de la admisión de la demanda por parte del Juzgado Tercero de Circuito de Panamá, Ramo Civil, en el año 93, dicho tribunal era competente para conocer del proceso de adopción, y por tanto, los cambios y modificaciones acaecidos con posterioridad mal pueden afectar o sustraer el asunto ya iniciado, de su conocimiento, para someterlo a la consideración de otro Despacho, por cuanto que la nueva legislación familiar no dispone que los procesos en trámite, al entrar en vigencia, pasen a manos de los jueces a quienes se le atribuye competencia". (Fs. 39-40).

Fundamenta su conclusión el Juez de Familia en que el artículo 835 del nuevo Código sobre la materia dispone que: "los negocios y los procesos que se hallen en trámite" al entrar en vigencia el mismo, "se regirán por las leyes y disposiciones anteriores".

La Sala Civil desea aclarar que, si bien es cierto el artículo 835 del Código de la Familia establece que los casos que se encuentren en trámite al entrar en vigencia el Código de la Familia, se regirán por las leyes y disposiciones anteriores, dicho principio se refiere únicamente a las normas de carácter sustantivo, que serán aplicables al proceso, más no a las procedimentales, como lo serían los preceptos que fijan la competencia de los distintos tribunales.

La consideración anterior se desprende del concepto establecido por el artículo 836 del Código de la Familia que establece:

"Artículo 836: Mientras se fijen las partidas correspondientes en el Presupuesto General de Estado, las funciones de los Jueces de Familia y los jueces de Menores las seguirán ejerciendo los Jueces Seccionales de Menores, el Tribunal de Menores y los Jueces Ordinarios.

El mismo requisito presupuestario será indispensable para el nombramiento de los Defensores de Oficio y de los Defensores del Menor".

Dentro de un estricto análisis de la disposición anterior, la Sala puede notar que la intención del legislador ha sido, en primer lugar, delimitar la competencia sobre los asuntos de familia y el menor hacia los nuevos juzgados que crea el código, y en segundo término, fijar la competencia temporal a los Jueces Seccionales de Menores, el Tribunal Tutelar de Menores y los Jueces Ordinarios, mientras eran aprobadas las partidas para la instalación de los Jueces de Familia y de Menores, y así no dejar los procesos nuevos sin una recepción adecuada.

Sin embargo, al quedar establecidos los Jueces de Familia y de Menores, tal como ocurre en la actualidad, de conformidad a lo dispuesto, a contrario sensu, por el citado artículo 836, los mismos deben adquirir el conocimiento sobre los procesos de familia que se estén ventilando, aunque, por el período en que fue interpuesta la causa, deban ser fallados con la ley sustantiva anterior, tal como lo contempla en artículo 835 del Código de la Familia.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FIJA la competencia del proceso de adopción instaurado por ROBERTO CARLOS SMALL SMIKLE a favor del menor FRANK EZEQUIEL DAVIS RICHARDS, en el JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ Y EL JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN PROMOVIDO POR PILAR DEL CARMEN SÁNCHEZ HANSIEL A FAVOR DE LA MENOR DANIELA DEL CARMEN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE DOS MIL UNO (2001).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior de Familia ha llegado a esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el Conflicto de Competencia surgido entre el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial con sede en La Chorrera y el Juzgado Seccional de Familia del Tercer Circuito Judicial con sede en La Chorrera, dentro del Proceso de Adopción interpuesto por PILAR DEL CARMEN SANCHEZ HANSIEL en contra de YADIRA MIREYA SATURNO DE HOYOS en favor de la menor DANIELA DEL CARMEN.

Le corresponde a la Sala Civil resolver el presente conflicto en atención a lo dispuesto en el ordinal 3 del artículo 93 del Código Judicial dispone que esta Sala conoce, en una sola instancia, de las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre tribunales que no tengan otro superior común, como ocurre en el presente caso, donde el conflicto se produce entre un juzgado seccional de menores y otro de la jurisdicción de familia.

Antes de fijar la competencia al tribunal que le corresponde, procede la Sala a revisar el negocio en mención.

La señora PILAR DEL CARMEN SANCHEZ HANSIEL mediante apoderado judicial, presentó ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia demanda de adopción de la menor DANIELA DEL CARMEN, hija biológica de YADIRA MIREYA SATURNO DE HOYOS, aduciendo que ésta le entregó su hija menor cuando tenía días de nacida y que, mediante acta de entrega de 11 de diciembre de 1996, el Juzgado Seccional de Menores del Tercer Circuito Judicial, con sede en La Chorrera, le entregó la menor DANIELA DEL CARMEN a PILAR DEL CARMEN SANCHEZ, por lo que formalmente eleva esta solicitud.

El Juzgado de Niñez y Adolescencia de La Chorrera admitió mediante resolución de 3 de febrero de 1998 la solicitud de adopción presentada por PILAR DEL CARMEN SANCHEZ HANSIEL, interpuesta contra YADIRA MIREYA SATURNO DE HOYOS, en favor de la menor DANIELA DEL CARMEN.

Consta a fojas 17 y 18 del expediente el poder otorgado por la demandada al licenciado ARTURO RICARDO y la contestación de la demanda en la que se aceptan todos los hechos, señalándose en el informe de trabajo social visible a fojas 24 y 25 del expediente que se cede la custodia de la niña a favor de la demandante.

Mediante resolución de 26 de enero de 1999 se fijó para el 16 de marzo de 1999 la audiencia de suspensión de Patria Potestad de la menor DANIELA DEL CARMEN contra YADIRA SATURNO DE HOYOS, evento que no se efectuó fijándose, mediante resolución de 28 de febrero de 2000, una nueva fecha para realizarla el 1 de marzo de 2000.

En virtud de que no se acompañó con la demanda el certificado de nacimiento de la menor DANIELA DEL CARMEN, mediante Oficio No. 2059-00 de 29 de septiembre de 2000, la Juez de Niñez y Adolescencia de La Chorrera le solicitó a la Dirección del Registro Civil la certificación de los registros de nacimiento de los hijos de la señora YADIRA MIREYA SATURNO DE HOYOS y, en nota visible a foja 45 del expediente, fechada el 29 de septiembre de 2000, la Dirección del Registro Civil certifica que en sus archivos computarizados sólo constan los nacimientos de las menores JULISSA YADIRA SATURNO y KENIA YADIRA VALDERRAMA SATURNO.

El Juzgado de Niñez y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial, con sede en La Chorrera, resolvió inhibirse de conocer y decidir el presente proceso de adopción y remitió el expediente al Juzgado Seccional de Familia del Tercer Circuito Judicial argumentando lo siguiente:

"...

A foja (16) se admite el proceso de adopción de cuya providencia fue debidamente notificada la señora Yadira Saturno de Hoyos (presunta madre de la menor) e igualmente a foja 17 y 18 se observa el poder conferido por la señora Yadira Saturno de Hoyos al Licdo. Arturo Ricardo a fin de que la representara en el proceso en encuesta y la contestación a la pretensión de la demandante (Pilar del Carmen Sánchez Hansiel).

En este mismo orden de ideas, se observa en la evaluación social realizada por uno de los técnicos del equipo interdisciplinario de este Tribunal, que la madre biológica sede el derecho a la señora Pilar para que realice la adopción, e igualmente se desprende que la señora Pilar Sánchez mantiene contacto con la madre y que actualmente la misma no pelea la custodia de la niña, que mas bien cede su derecho.

El Título primero, artículo 252 del Código de la Familia, numeral 4, indica que en materia de competencia la adopción de menores debe ser de conocimiento y decisión de los juzgadores seccionales de familia, salvo las adopciones de menores abandonados.

En el caso que nos ocupa de acuerdo a la investigación preliminar realizada por el equipo interdisciplinario de este tribunal y de las piezas contentivas del expediente se desprende que existe consentimiento de la madre, por lo que considera el despacho que para el proceso presente carece de competencia para su decisión: ...

..."

(Fs. 47 y 48)

No obstante, el 20 de noviembre de 2000 el Juzgado Primero Seccional de Familia del Tercer Circuito Judicial de Panamá remitió el expediente al Tribunal Superior de Familia a fin de que dirimiese el conflicto de competencia por considerar que dicho proceso es de competencia del Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de Panamá. En la parte medular de dicha resolución se sostiene lo siguiente:

"....

En primer término, impera destacar que en el negocio de marras se da el fenómeno jurídico procesal conocido como prórroga de competencia, específicamente la prórroga tácita, toda vez que en el caso de la parte actora, esta concurrió al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de Panamá a fin de entablar su petición, mientras que por su lado, el demandado no tuvo objeción luego de contestar la demanda, a que dicha instancia judicial asumiera el conocimiento del mismo, cumpliéndose así los requisitos exigidos por el artículo 248 del Código Judicial.

De igual forma, y en adición a lo expuesto, ha quedado demostrado en el expediente la situación irregular en que se encuentra la menor cuya adopción se pretende, tanto así que dentro de la solicitud de adopción conocida por el juzgado de procedencia, se alude a un proceso de protección de la misma y al trámite sumario referente a la suspensión de la relación parental de la presunta madre biológica de la menor.

...

(Fs.58-61)

La Sala estima que son aplicables al caso los artículos 752 y 754, ambos del Código de Familia que señalan lo siguiente:

"Artículo 752: A los juzgados Seccionales de Familia le corresponde conocer y decidir:

1...

2....

3....

4. Adopción de menores, salvo los casos de menores en abandono.

...."

"Artículo 754: A los Juzgados Seccionales de Menores les corresponde:

....

10. Conocer de la adopción en casos de menores en abandono; y"

El artículo 300 del Código de la Familia señala, con relación a los menores abandonados, lo siguiente:

"Artículo 300: Para los efectos de la adopción, se considera en estado de abandono el menor cuyos padres o guardadores lo confían a un establecimiento público o privado, por no poder proveer su crianza y educación, desatendiéndolo injustificadamente en el orden afectivo, económico y familiar por espacio de seis (6) meses.

Así mismo, se considera abandonado el menor cuyos padres rehúsan el cumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la relación parental, en términos tales que hagan presumir, fundadamente, el abandono definitivo".
(Resaltado de la Sala)

De acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales citadas, el Juzgado Seccional de Menores conoce de los procesos de adopción de menores en estado de abandono.

En este caso, consta que se produjo el consentimiento de la madre biológica YADIRA SATURNO de la menor, a favor de la señora PILAR DEL CARMEN SANCHEZ HANSIEL, para que ésta adoptase a su menor hija. También es evidente que nos encontramos dentro de un proceso de adopción donde no se ha establecido la identidad de la menor mediante el respectivo certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, por lo que no se ha probado tampoco fehacientemente que la señora YADIRA SATURNO DE HOYOS es la madre biológica de la menor.

Tomando en consideración que la menor fue entregada recién nacida por su presunta madre biológica, YADIRA SATURNO, a la señora PILAR DEL CARMEN SANCHEZ HANSIEL, en circunstancias en que fue el Juzgado de Menores quien conoció con anterioridad del proceso de protección de dicha menor instaurado por la ahora adoptante, y de acuerdo con lo señalado por el artículo 300 del Código de la Familia, es opinión de la Sala que estamos ante una menor en estado de abandono, por lo que el proceso de adopción, de acuerdo a lo establecido en los artículos 753 y 754 del Código de la Familia, es competencia del Juzgado de Niñez y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial con sede en La Chorrera.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FIJA LA COMPETENCIA del proceso de adopción de la menor DANIELA DEL CARMEN en el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial con sede en La Chorrera.

Notifíquese y Devuélvase,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) EMETERIO MILLER R.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO

Secretario Encargado

RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 002-08 DE 30 DE MARZO DE 2010, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA WALESKA HORMECHEA. - PONENTE. ANIBAL SALAS CÉSPEDES - PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE (2011).

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Cuarta de Negocios Generales

Ponente: Aníbal Salas Céspedes

Fecha: lunes, 28 de febrero de 2011

Materia: Apelación

Expediente: 869-10

VISTOS:

En grado de apelación en subsidio conoce la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, la Resolución No. 002-08 de fecha 30 de marzo de 2010, emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Niñez y Adolescencia, presentada por el licenciado Raúl Olmos, actuando en representación de la licenciada Waleska Hormechea, en la cual se determinó la lista de seleccionables y no seleccionables del Concurso No.002-2008 (Interno), para la posición 2092 de Magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

La recurrente, a través de su apoderado legal, basa su disconformidad en los siguientes motivos,

"Antes de esbozar nuestras consideraciones relacionadas a la inconformidad en torno a la actuación de la Comisión de Personal, debemos destacar la intervención activa de la Magistrada Cossú de Herrera como integrante de la Comisión de Personal de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, encargada de(sic) aplicación de la Carrera Judicial cuyas funciones son la evaluación de la documentación presentada por los aspirantes al Cargo de Magistrado (a) del Tribunal Superior.

Es obvio que la referida funcionaria a pesar de conocer su obligación de separarse del conocimiento de la presente participó y firmó el acta

No.001-2010 de la sesión celebrada el día treinta (30) de marzo del presente año y publicada mediante Edicto No.002-08 fijado el 31 de marzo de 2010.

"PRIMERO: De acuerdo al Acta No. 001-2010 de 30 de marzo de 2010, la Comisión de Personal no avalúo la ponencia presentada por la Licenciada HORMECHEA, bajo el Título "El rol del juez en el juicio oral", sobre la base que no acreditó la calidad de expositora.

Al respecto debo indicar que la certificación respectiva se encuentra en otra ponencia, la cual fue expedida por la Escuela Judicial y que incluye la acreditación de expositora en dos conferencias, a saber "Mediación y Conciliación Penal" y "El rol del juez en el proceso oral",

La aludida certificación data del 30 de agosto de 2005, y aparece en la ponencia de "Mediación y Conciliación penal", acreditada en el concurso.

SEGUNDO: La puntuación asignada a las ponencias acreditadas, sólo toman en cuenta la extensión de las ponencias, partiendo claro está de la síntesis presentada, no obstante, se pasa por alto que como tal, no tiene la extensión de una publicación. Por otro lado, la Comisión deja de lado, los demás elementos que deben ser ponderados como lo son: el auditorio al que se dictó el curso y la base científica de las mismas.

Con relación a la ponencia no valorada, solicito respetuosamente se reconsidere la decisión y se entre a valorar las aludidas ponencias y asignarles la puntuación como materia aplicable a la aludida ponencia, ya que se refiere a la materia penal y de acuerdo al artículo 24 del Acuerdo 46 de 27 de septiembre de 1991 y sus reformas, expedido por la Corte Suprema de Justicia, a través del cual se reglamenta la Carrera Judicial, las ejecutorias serán valoradas según la profundidad, extensión y base científica de las mismas.

El punto III del referido Acuerdo señala que las ejecutorias se acreditaron con copia de la síntesis de la conferencia y tipo de auditorio al que se dictó el curso o seminario.

En ese sentido, debo señalar con mucho respeto que a nuestra consideración la puntuación asignada a las ponencias acreditadas, pondera sólo la síntesis acreditada, más no los demás elementos como lo son el auditorio al que se dictó el curso ni la base científica de las mismas, además que se trata de temas de actualidad y que se relacionan íntimamente con la función judicial.

En el caso que nos ocupa la conferencia estaba dirigida a magistrado, jueces, fiscales, defensores de oficio y abogados del foro, organizado por Escuela Judicial, elementos que deben tomarse en cuenta en la valoración.

TERCERO: Además solicito se reconsidere la puntuación asignada al resto de las ponencias.

En el caso en particular de los temas de mediación y conciliación, podemos decir se trata de temas de actualidad y que se relacionan

íntimamente con la función judicial y de descongestión del sistema judicial; de manera que los jueces y magistrados de la jurisdicción penal deben manejar estos temas a cabalidad para aplicar la normativa que involucra los métodos alternos de solución del conflicto, como una fórmula que permite la reducción del rezago judicial.

En el caso de los temas del rol ético del juez en la audiencia, ética judicial, advertencia de inconstitucionalidad y valoración de la prueba en el sistema acusatorio, todos representan conocimientos aplicables a las distintas ramas del derecho por ser temas de aplicación general. En tal sentido, al hablar de ética judicial involucra a todos los funcionarios del Órgano Judicial llamados a observar y cumplir estas reglas, en consecuencia, mal puede considerarse materia relacionadas, ya que está implícita en el devenir diario de un magistrado y de un juez el comportarse bajo los parámetros de la ética judicial.

Respecto al tema de inconstitucionalidad, que también fue considerado como materia relacionada, debemos señalar que los temas de constitucionalidad son aspectos que deben manejar ampliamente todo operador jurídico, más en esta rama del derecho de hay (sic) un alto contenido de garantías y derechos constitucionales que deben ser el tutelados.

En cuanto a la ponencia Valoración(sic) de la Prueba en el Sistema Acusatorio, debo señalar que el título de la ponencia es la "Sana Crítica como sistema de valoración probatoria", debemos señalar que es materia aplicada y no relacionada, pues es el sistema que legalmente reconoce nuestro Código Judicial y todos los demás textos jurídicos como mecanismo de valoración, de manera que el contenido se relacionado (sic) al métodos en sí y es aplicable a todas las áreas jurisdiccionales.

Cabe apuntar que paralelamente a esta Acta 001-2010 la Comisión de Personal Ramo Penal, ponderó favorablemente el contenido de las ponencias contrario a lo ocurrido en la Comisión de Niños y Adolescencia.

Respecto a la ponencia sobre Buenas Prácticas Tribunales, si bien es cierto se calificó como materia aplicada, no menos cierto se calificó con 0.50, siendo un tema innovador y con base científica con resultados positivos en aquellos tribunales que la han aplicado por lo que solicito sea revisada la puntuación asignada.

Llama poderosamente la atención que en el segmento de artículos se nos ponderó con puntaje muy bajo asignado el carácter de materia relacionado a los artículos como conciliar intereses", "visión ciudadana de la Justicia" y "Oralidad en las decisiones judiciales", siendo sus contenidos temas directamente relacionados con la rama de familia y penal áreas que corresponden a temas vinculados con el cargo en concurso, por ende deben calificarse como materia aplicada..."

Seguidamente, de fojas 135 y 136 encontramos el concepto vertido por la Dirección de Recursos Humanos, que en lo medular de su exposición manifestó:

"...Siendo así, esta Dirección considera que las ejecutorias presentadas por la Licda. Hornechea, con excepción de la que no fue considerada en el presente concurso denominada "El rol del juez en el juicio oral(sic), fueron analizadas y evaluadas correctamente por los comisionados, otorgándoles así la evaluación que cada una merece, basándose en apreciaciones críticas.

Por todo lo expuesto, esta Dirección conceptúa que sólo se debe RECONSIDERAR la Resolución No. 002-2008 (Interno) del 30 de marzo de 2010 emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Niñez y Adolescencia, a fin que la Comisión de Personal, Ramo Niñez y Adolescencia le asigne a la Licda. WALESKA HORMECHEA, la puntuación que merece en la ejecutoria denominada "El rol del juez en el juicio oral", y conceder el recurso de apelación en subsidio en los otros temas."

Por su parte, la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Niñez y Adolescencia, por su parte, mediante resolución de 25 de mayo de 2010, decide mantener la decisión vertida por la Dirección de Recursos Humanos, en cuanto a que se reconsidere la resolución No. 002-2008 de 30 de marzo 2010, y se conceda el Recurso de Apelación en Subsidio, a la licenciada WALESKA HORMECHEA.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Expuestos los argumentos de la recurrente, así como de la Dirección de Recursos Humanos, Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo de Niñez y Adolescencia, y las pruebas que constan en el expediente, corresponde a esta Sala, emitir opinión en cuanto al recurso de apelación en subsidio promovido por la licenciada WALESKA HORMECHEA.

Llegado el momento de analizar las inconformidades de la apelante, pasaremos a considerar en primer lugar su inconformidad en lo que se refiere a la designación de la Magistrada Judith Cossú de Herrera, en la Comisión de Personal de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, cuya función es evaluar la documentación presentada por los concursantes al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, además manifiesta, que la labor de la Comisión se ve empañada, en virtud de una recusación en contra de la Comisionada, y que el Magistrado a quien correspondió el negocio en su momento, la separó del conocimiento de una queja disciplinaria instaurada en contra de la Licda. Waleska Hornechea, situación, según el apoderado de la recurrente, es nociva para los intereses de su representada, por lo que solicita se separe a la Magistrada Cossú de Herrera, del conocimiento del concurso.

De conformidad con los artículos, 32 y 33, en concordancia con el art. 31 del Reglamento de Carrera Judicial, que a la letra dicen:

"Artículo 32: Las personas afectadas por la precitada comunicación podrán interponer recurso de reconsideración y apelación en subsidio en el término de dos días hábiles después de notificados los resultados. La Comisión de Personal deberá resolver el recurso de reconsideración dentro de los diez días hábiles." (el resaltado es de la Sala)

"Artículo 33: El recurso de apelación se surtirá ante la Sala Cuarta de la Corte contra las resoluciones que emanen de la Comisión de Personal y contará con veinte días hábiles para resolver la alzada." (lo resaltado es de la Sala)

La dos normas transcritas, son claras, al manifestar que, una vez notificados los aspirantes sobre la lista de seleccionables y no seleccionables, si se sienten afectados por la decisión de la Comisión de Personal, podrán hacer valer sus derechos, a través del único medio de impugnación permitido '*el recurso de reconsideración y apelación en subsidio*', pero sólo en lo que respecta al concurso, no hace alusión a ningún otro tipo de recurso. (lo resaltado es de la Sala)

Aunado a lo anterior, cabe manifestar que la designación de la Magistrada Judith Cossú de Herrera, a la Comisión de Personal de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, fue realizada por la Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo No.88 de 19 de febrero de 2010.

En virtud de lo expuesto, anteriormente y considerando que los artículos antes citados son explícitos, mal podría entrar la Sala a considerar la separación de uno de los miembros designados a formar parte de la Comisión de Personal evaluadora del concurso No.002-2008 (Interno), para el cargo de Magistrado del Tribunal de Niñez y Adolescencia, de modo que, lo peticionado por la apelante, no es competencia de esta Sala, pues, existen otras vías recurribles.

En atención a las alegaciones del apoderado judicial de la licenciada Hormechea, referente a las diferentes ponencias, manifiesta que su representada presentó dos ponencias, tituladas 'Mediación y Conciliación Penal' y la otra 'El Rol del Juez en el Proceso Oral', para la posición 2092, para el cargo de Magistrada del Tribunal de Niñez y Adolescencia, sin embargo, se evaluó la primera, pero no la segunda ponencia titulada 'El rol del juez en el proceso oral', asimismo agregó la apelante, que no sólo debe valorarse la extensión de éstas, que hay otros elementos que también deben ponderarse, como el auditorio al que se dictó el curso y la base científica de las mismas, por lo que solicitó se valoraran las referidas ponencias de acuerdo al artículo 24 del Acuerdo 46 de 27 de septiembre de 1991 y sus reformas.

También señala, el apoderado judicial de la licenciada Waleska Hormechea, que paralelamente a esta Acta 001-2010, la Comisión de Personal, Ramo Penal, ponderó favorablemente el contenido de las ponencias contrario a lo ocurrido en la Comisión de Niñez y Adolescencia.

Continúo alegando el licenciado Olmos, representante de la apelante, que se le ponderó con puntaje muy bajo, los temas "como conciliar intereses", "visión ciudadana de la Justicia" y "Oralidad en las decisiones Judiciales", temas relacionados directamente con la rama de familia y penal, vinculados con el cargo del concurso.

En primer lugar, y antes de exponer nuestra posición, es importante señalar algunos comentarios en cuanto al sistema utilizado por las Comisiones de Personal designadas para determinar la lista de elegibles y no elegibles.

Las Comisiones de Personal designadas, constituyen una colegiatura en donde se designan varios comisionados de las distintas esferas judiciales, en cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Carrera Judicial, todos ellos profesionales, con suficiente conocimientos y experiencias, para que sus apreciaciones sean objetivas, transparentes y equitativas, cuyo objetivo primordial, es cumplir con los principios generales, para la cual fue creada la Carrera Judicial, 'igualdad de oportunidades para todos los aspirantes.'(El resaltado es de la Sala)

La Comisión de Personal tiene autonomía para establecer el sistema que han de establecer para determinar la lista de seleccionables y no seleccionables, (Libre Apreciación, Mediana y Promedio), basándose sólo en la mayoría de votos que éstos emitan, y el sistema que escojan, debe ser utilizado con prudencia, para calificar a los aspirantes, así como, las pruebas que se realicen a cada uno de ellos; y no precisamente en los participantes; en el concurso bajo examen, particularmente se optó por el sistema de libre apreciación, señalando como puntaje mínimo, 124.57, estableciéndose ocho (8) aspirantes a la lista de seleccionables. (fs. 125).

El artículo 22 del Reglamento de Carrera Judicial, establece una serie de documentos que son considerados como ejecutorias y publicaciones, tales como, investigaciones, conferencias, artículos jurídicos, ensayos, folletos, libros, compilaciones y similares; que para proceder a su valoración, debemos tomar como punto de referencia el artículo 24, punto III, denominado, 'Ejecutorias y Publicaciones', del Reglamento de Carrera Judicial, citado anteriormente, ya que, establece la tabla de valoración para cada uno de ellas.

En cuanto a la disconformidad de la licenciada Hormechea, en lo que se refiere la ponencia del "El Rol del Juez en el proceso oral", visible a fojas 124 del infolio, relativa a la calificación de las ponencias presentadas por la concursante, observamos que la Comisión de Personal, anotó al lado de esta ponencia "N/V no acreditó calidad de expositora", al parecer, la apelante aportó en un mismo legajo las dos ponencias, "Mediación y Conciliación Penal", que sí fue valorada, más no la ponencia, "El Rol del Juez en el Proceso Oral", objeto del recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la licenciada Waleska Hormechea, por encontrarse afectada con la decisión emitida por la Comisión de Personal.

Luego, la Comisión de Personal, al revisar nuevamente las ponencias antes citadas, se percató que sí se aportó la ponencia 'El Rol del Juez en el Proceso Oral', además, del documento que la acredita como expositora; que por haberse presentado de manera conjunta (en un sólo folder) con la ponencia 'Mediación y Conciliación Penal', paso desapercibida, en tal sentido la Comisión de Personal, procedió a ponderarla como materia aplicable, asignándole un valor de 0.50, toda vez, que el tema desarrollado, guarda estricta relación con las funciones a desempeñar para el cargo de Magistrado del Tribunal de Niñez y Adolescencia. Es necesario mencionar que el tema guarda relación con la ponencia "El Rol del Juez en la Audiencia", que será considerada más adelante.

Además, alega la recurrente, que se valoraron con puntajes muy bajos, y tampoco se valoró el auditorio, podemos decir, que el artículo 24, punto VII (Pruebas), del Reglamento de Carrera Judicial, en el tercer punto, relativo a las Ejecutorias y publicaciones es claro, cuando dice, "Debe acreditarse mediante la copia de la publicación o síntesis de la conferencia y tipo de auditorio al que se dictó el curso o seminario" para poder ser valoradas.

En base a lo que indica la norma, relativa a las Ejecutorias y Publicaciones, consideramos que la Comisión de Personal designada, tomó en consideración estos factores, así como, también, los factores de apreciación, profundidad, base científica y extensión, ajustándose a la tabla de valoración del art. 24 del Reglamento de Carrera.

Aunado a lo anterior, debemos añadir que el artículo 11, de este Reglamento de Carrera, otorga a la Comisión de Personal la facultad de aplicar e interpretar las políticas, normas y procedimientos del sistema de Carrera Judicial.

En relación a la ponencia titulada "La Mora Judicial en el Marco de las Reformas Judiciales" la misma fue ponderada como materia aplicada al cargo, porque los conocimientos y el desarrollo del tema guardan total relación como el cargo para el cargo convocado a concurso, valorada con 0.50.

Relativo a la ponencia, "Medidas Curativas para el Victimario de Violencia Intrafamiliar", se le ponderó como materia aplicable al cargo, porque el tema y puntos desarrollados, guardan estrecha relación con el cargo convocado a concurso. Cabe resaltar que los cuadernos numerados 3 y 4, tratan sobre la misma materia desarrollada, por lo tanto, fue acertada la evaluación de la Comisión de Personal, al ponderarla en una sola ponencia, ya que, evaluarlas por separado, sería dejar en desventaja al resto de los participantes. Valorada con 0.50.

La ponencia, titulada "Violencia Doméstica y sus Consecuencias en los Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores", la misma fue ponderada como materia aplicable al cargo, en vista que, el tema desarrollado, guarda total relación con la materia objeto del concurso bajo examen, cuyo valor es de 0.50.

Ponencia sobre "Procedimiento y Trámite de Adopción de Menores de Edad en Panamá" ponderada como materia aplicable, toda vez, que el tema desarrollado es su totalidad se dirige hacia los menores de edad, por tanto, se considera, estrictamente vinculado a las funciones del cargo sometido a concurso, designándole un valor de 0.50.

Relativo a la ponencia "El Rol Ético del Juez en la Audiencia", es un tema estrictamente relacionado con las funciones que cotidianamente debe tener presente un funcionario a cargo de una Magistratura, de cualquier jurisdicción, el tema se desarrolla de forma general, y se enmarca especialmente, en la proyección que debe tener el Juez, basados en patrones de conducta durante la audiencia, sin embargo consideramos que es un complemento a la ponencia "El Rol Ético del Juez en el Juicio Oral" examinada, en párrafos anteriores, de allí merecida su ponderación como materia relacionada, por la Comisión evaluadora, designándole un valor de 0.50, (por las horas invertidas).

Relativo a la ponencia "El Proceso de Protección y su relación con el Proceso de Adopción" el tema desarrollado, guarda estricta relación con las funciones a desempeñar en el cargo de Magistrado del Tribunal de Niñez y Adolescencia, la cual se ponderó como materia aplicada, con un valor de 0.50

En cuanto a la ponencia "Buenas Practicas Tribunalicias", ponderada como materia aplicable, por estar estrictamente relacionada al cargo objeto del concurso, y se le designó un valor de 0.50. El tema desarrollado va dirigido hacia el mejoramiento de la administración de justicia, garantizando la transparencia y la agilización de los procesos.

La Ponencia, titulada "Ética Judicial", ciertamente, todo funcionario que administra justicia, debe conocer sobre la ética judicial, y los principios que la rigen; no solamente los de la jurisdicción de Niñez y Adolescencia, sino todos en general; la misma se ponderó como materia relacionada, en vista que no guarda estrecha relación con las labores diarias del cargo sometido a concurso, asignándole un valor de 0.25. (por la cantidad de horas invertidas)

Ponencia, "La Conciliación Judicial y la Mediación", evidentemente es tema de actualidad, además, todo funcionario que es operador de la justicia debe conocer sobre el tema, no obstante, no guarda estrecha relación con las funciones que se realizan a menudo en el cargo convocado a concurso; se ponderó como materia relacionada, con un valor de 0.25.

La Ponencia de "Hacia el Sistema Acusatorio" considerando que es un procedimiento nuevo a implementarse próximamente, es decir, que aún no está funcionando; por supuesto, que los funcionarios que administran justicia, deben tener conociendo y manejar el tema. Se ponderó como materia relacionada, asignándole un valor de 0.50, (cantidad de horas invertidas).

Referente a la ponencia "La Advertencia de Inconstitucionalidad", ampliamente desarrollada, toda persona que administra justicia debe conocer del tema, y su aplicación, sin embargo, no guarda estrecha relación con las funciones diarias, a desempeñar en el cargo de Magistrado del Tribunal de Niñez y Adolescencia, así que, se ponderó como materia relacionada, designándole un valor de 0.50, (considerando las horas invertidas).

La apelante alega que la ponencia titulada "Valoración de la Prueba en el Sistema Acusatorio", fue mal valorada, (fs. 133), sin embargo, la ponencia que aparece valorada por la Comisión de Personal se titula "Valoración de la Prueba en el Sistema Penal Panameño", (fs. 124), que es realmente su título, luego de verificar el cuaderno contentivo de la misma. El tema expuesto es sobre la sana crítica, sus características e íntima convicción; temas que deben ser considerados por cualquier persona que administra justicia, sin embargo, se enfoca exclusivamente hacia el área penal de manera muy general, ponderada como materia relacionada, designándole una valor de 0.50.

Advierte esta Corporación, en relación a esta ponencia, que en la primera página (portada), se indica que la ponencia se realizó los días 13,14 y 15 de marzo de 2003, e indica que se invirtieron 6 horas, y en la segunda página, que trata de esta misma ponencia, y para la misma fecha, señala que fueron 25 horas invertidas; luego, en la ponencia llevada a cabo los días 7,8,9,10 y 11 de enero de 2003, sobre esta misma materia, no indica la cantidad de horas invertidas; denotándose cierta contradicción, de manera que, de no contar con las horas invertidas es imposible proceder a valorarla, este es un requisito indispensable, de la tabla de valoración (art. 24 del R. Carrera); por lo tanto, la Sala se manifiesta acorde con la ponderación y valoración emitida por la Comisión de Personal.

En cuanto a la ponencia, "Panorama y Estatus de la Violencia Doméstica", el tema se desarrolla sobre los diferentes tipos de violencias, doméstica, patrimonial, etc., es cierto que muchas veces, en este tipo de procesos se ven involucrados menores de edad, sin embargo, se enfoca de manera general; así que se ponderó como materia relacionada, con un valor de 0.50.

Referente a la ponencia "Organización de Tribunales", éste tema es de gran importancia, y todo funcionario que labora en esta institución, obligatoriamente debe conocer y manejar el tema muy bien; se desarrolla sobre conocimientos generales en cuanto a las diferentes dependencias que conforman el Órgano Judicial; se le ponderó como materia aplicable, porque guarda estrecha relación con las funciones a desempeñar, en el cargo convocado a concurso, asignándole un valor de 0.50.

La ponencia titulada, "Abordajes Internacionales en Materia de Niñez y Adolescencia", el tema abordado guarda estricta relación con las funciones a desempeñar con el cargo expuesto a concurso, (Magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia), abarca y desarrolla sobre la Convención de los Derechos del Niño, la Creación del Tribunal Tutelar de Menores, y la entrada en vigencia del Código de la Familia, etc., todos relacionados a la materia objeto del cargo convocado a concurso; fue ponderada como materia aplicable, con un valor de 0.50.

En cuanto a la ponencia "*Diferencias y Similitudes entre la Conducta Infractora y el Riesgo Social*", tema que se enfoca directamente hacia los menores y adolescentes, puesto que, es materia tratada a diario en este ámbito, así que, guarda estrecha relación con las funciones del cargo de Magistrado de Niñez y Adolescencia, convocado a concurso; ponderada como materia aplicable, con un valor de 0.25, (por la cantidad de horas invertidas).

En lo que respecta a los artículos aportados, alega la recurrente, fueron valorados con una puntuación muy baja, seguidamente pasaremos a verificar, el artículo "Como Conciliar Intereses" presentado en una página de 8 1/2 X 13, se enfoca en el tema del divorcio, y sus consecuencias, la afectación del menor ante esta situación; y, como quiera, que no guarda estricta relación con el cargo convocado a concurso, se ponderó como materia relacionada, asignándole un valor de 0.25.

El artículo titulado "Visión Ciudadana de la Efectividad de la Justicia", el tema publicado, se enfoca a la vía de conciliación y la mediación, como forma alterna para solucionar conflictos, es un tema que guarda cierta relación, con el cargo expuesto a concurso, ponderada como materia relacionada, y se le asignó un valor de 0.10

Respecto al artículo "Oralidad en las Decisiones Judiciales", el tema se desarrolla en torno a la toma de decisiones de los jueces en las audiencias orales y públicas, enfocado hacia la rama penal, y al sistema acusatorio; así que no guarda estricta relación con el cargo a desempeñar, para el cargo convocado a concurso, se ponderó como materia relacionada, asignándole un valor de 0.25.

El artículo titulado "Fundamentos y Principios del Derecho Penal de Adolescentes", en vista que el tema desarrollado, es materia que guarda estricta relación con el puesto sometido a

concurso, se ponderó como materia aplicada , con valor de 0.33 (como quiera que la autoria del trabajo es compartida)

DECISION DE LA SALA

Analizadas las ponencias y artículos, que fueron tasados con baja puntuación, conforme alega la recurrente, lo cual dió génesis al proceso actual, fueron examinados uno a uno, tomando en cuenta, si el tema desarrollado en las mismas, guardaban estrecha o no relación con el cargo sometido a concurso; además, la Sala pudo percatarse, que algunas de ellas realmente guardan estricta relación y otras parcialmente con las funciones diarias que ha de desempeñar un Magistrado de Niñez y Adolescencia, cargo sometido a concurso; a su vez, se procedió a verificar la cantidad de horas invertidas en las diferentes ponencias, saltando a la vista, que algunas de ellas fueron presentadas dos veces, y otras con cierta diferencia en el título, pero que el contenido del tema desarrollado es similar, situación de la que se percató la Comisión evaluadora del concurso, quien procedió acumularlas, y asignarles una sola valoración. En otras ponencias, observamos que sí contaban con las fechas de exposición, pero no con la cantidad de horas invertidas, requisito del Acuerdo al Reglamento de Carrera, lo que también, fue advertido por la Comisión evaluadora.

Igualmente, sucedió con las publicaciones, se tomó en cuenta la clase de publicación, el tema, y su contenido jurídico, sin embargo, algunas de ellas, no tenía contenido jurídico. De allí, el uso de los criterios apoyados, en profundidad, extensión, aporte jurídica y base científica, conforme lo establecido en el cuadro de valoración; en tal sentido, arribamos a concluir que las ponencias presentadas por la licenciada Hormechea, fueron correctamente valoradas.

Asimismo, señalamos que en toda investigación, como aporte para instruir, o aumentar los conocimientos en determinada materia, tenemos que consultar diferentes materiales, sean estos libros, folletos, diccionarios, jurisprudencias, Códigos, etc.; sin embargo, en la mayoría de las ponencias presentadas, para su correspondiente ponderación y valoración, no se vislumbra ni se hace alusión al material, en el cual se apoyó la recurrente para llevar a cabo sus investigaciones, parte importante de todo trabajo, en especial cuando el mismo va a ser evaluado.

En lo que respecta, al argumento del apoderado judicial de la apelante, cuando dice, que paralelamente a esta Acta 001-2010 la Comisión de Personal, Ramo Penal, ponderó favorablemente las ponencias contrario a lo ocurrido en la Comisión de Niñez y Adolescencia, y, como ya dijimos en líneas anteriores, que al analizar las ejecutorias y publicaciones, percibimos que algunas se les ponderó como materia relacionada, porque el contenido del tema desarrollado, se enfocaba estrictamente al desempeño de funciones requeridas en otras áreas, y no para este cargo, por ende tenía que variar la ponderación de las ponencias.

Por otro lado, en reiteradas ocasiones la Corte ha manifestado en fallos anteriores, que, "...*Todo concurso que celebre el departamento de carrera judicial es independiente uno a otro, de allí es importante saber o conocer el sistema de valoración que utilizan los comisionados en uno y otro, sin que el usado en uno sea determinante para utilizarlo en otro,*

independientemente de que, como es posible, participen los mismos concursantes... inclusive cada Comisión esta conformada por distintos representantes judiciales, ya sea rama Civil, Penal, Familia o de los distintos Distritos judiciales, por lo cual cada valoración puede variar dependiendo de la apreciación de los que conforman la comisión respectiva. (el resaltado es de la Sala)

Esbozados los argumentos anteriores, consideramos que la labor de la Comisión de Personal, se llevó a cabo de forma transparente, y correcta, ciñéndose al Reglamento de Carrera Judicial, (a los factores que allí se señalan), así como, a las facultades que esta les otorga, para arribar a la decisión más justa, que redunde en beneficio de todos los aspirantes al concurso; por consiguiente, los Magistrados que integran la Sala, se manifiestan acorde con la decisión emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Niñez y Adolescencia, en cuanto a que debe reconsiderarse la Resolución No. 002 de 30 de marzo de 2010, emitida por esta Comisión, en el sentido de reconocerle la ponderación, y evaluación de la ponencia titulada "El Rol del Juez en el Proceso Oral", a la recurrente.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, MODIFICA la Resolución No. 002-08 de 30 de marzo de 2010, dictada por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Niñez y Adolescencia, sólo, en el sentido de reconocerle a la licenciada WALESKA HORMECHEA como materia aplicable la ponencia titulada 'El Rol del Juez en el Proceso Oral', con un valor de cero con cincuenta puntos (0.50), que sumado al puntaje anterior (de 167.60) asciende a un total de ciento sesenta y ocho puntos con diez (168.10), que la mantiene en la lista de seleccionables del Concurso No.002-2008 (Interno), para la posición 2092 de Magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia; y se MANTIENE la aludida resolución en todo lo demás.

Devuélvase el expediente a la Comisión de Personal de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, una vez ejecutoriada la presente resolución.

Notifíquese y cúmplase,

(fdo.) ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

(fdo.) WINSTON SPADAFORA
FRANCO

(fdo.) ALBERTO CIGARRUISTA
CORTEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G..
Secretario General